

Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero

Miguel Pinto Parabá (Coordinador)



Prohibida su venta

Biblioteca Laboral N°17

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Autor: Lecciones del Levantamiento Popular
del 12 y 13 de febrero

Miguel Pinto Parabá (Coordinador)

Editor: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Depósito Legal: 4-1-31-16 P.O.

Foto: Jornadas del 12 y 13 de febrero de 2003 eldeber.com.bo

Febrero -2016

La Paz - Bolivia

**Lecciones del Levantamiento Popular
del
12 y 13 de febrero**

Miguel Pinto Parabá (Coordinador)

ÍNDICE

Prólogo a la cuarta edición	5
Nota a la tercera edición	7
Comentario	9
Presentación.....	13
Introducción.....	11
Bolivia: una fábrica de hacer pobres y rebeldes.....	20
El Gobierno intentó sacrificar el salario del pueblo.....	25
Impuestazo al salario, una imposición del FMI.....	28
Sindicatos y revolucionarios: no estuvimos a la altura de los acontecimientos.....	30
Analista económico: se agotó el modelo, ahora hay que sepultarlo.....	37
Endeudamiento externo, una nueva calamidad.....	41
La quiebra fiscal.....	44
Los rebeldes de uniforme.....	47
Fotoreportaje: Dos días de furia.....	56
El policía rebelde que derrotó al impuestazo del FMI.....	60
Hermano contra hermano.....	67
El poder mediático en Bolivia.....	70
Democracia neoliberal: sangre,	

violencia e impunidad.....	73
MAS: la solución viene de abajo.....	78
Mallku: trabajamos para hacer caer al gringo.....	80
¿Golpe de Estado o salida popular?.....	83
Los cinco desafíos del movimiento antineoliberal.....	87
Lecciones del levantamiento popular boliviano.....	90
Trotskyistas: es hora del gobierno obrero campesino.....	98
Crisis sindical: dirigentes de la COB quedan al descubierto.....	103
Anexo fotográfico.....	113

Prólogo a la CUARTA EDICIÓN

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social pone a consideración de los trabajadores y del público en general el texto “Lecciones del levantamiento popular del 12 y 13 de febrero”, coordinado por Miguel Pinto Parabá, que hace un recuento y posterior balance de los acontecimientos de febrero de 2003, el preludeo de la denominada “Guerra del Gas”, que culminó con la huida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“El modelo boliviano se ha convertido en una verdadera fábrica generadora de pobreza y rebeldía. En el último año casi 130 mil bolivianos cayeron en la pobreza, más de 50 mil perdieron el empleo y el ingreso per cápita y el salario tocaron fondo. Solo trepó el descontento y el malestar social que fueron los ejes de la revuelta popular que conmocionó Bolivia”, señala uno de los artículos del documento.

La revuelta fue detonada por el anuncio del entonces Presidente de confiscar entre el 4,2% y el 12,5% del salario de los trabajadores. Los primeros en levantarse y rechazar la medida fueron los policías que se acuartelaron en el GES (Grupo Especial de Seguridad).

Amotinados los policías, el Gobierno sacó a las calles a los militares para intentar controlar el desorden so-

cial. El saldo fue de 33 muertos, decenas de heridos, nueve edificios públicos y varias propiedades privadas, saqueados.

El Gobierno tuvo que levantar su medida económica antipopular, instruida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para retomar el control del país, pero la calma sólo duro siete meses, pues a fines de septiembre los movimientos sociales salieron a las calles en defensa de sus intereses sectoriales y, principalmente, nacionales, como el gas. Febrero fue el preludio de octubre.

Este material será distribuido de manera gratuita entre los trabajadores y la ciudadanía, y usado en los talleres organizados por la Escuela de Formación Política Sindical del Ministerio de Trabajo.

Febrero de 2016

Nota a la TERCERA EDICIÓN

Una vez más, los dirigentes sindicales fuimos sorprendidos por las bases: nos dieron otra lección.

El martes 15 de abril, en homenaje a los 51 años de vida de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Departamental (COD), de La Paz, presentó la primera edición del libro **“LECCIONES DEL LEVANTAMIENTO POPULAR DEL 12 Y 13 DE FEBRERO”**, con un tiraje de sólo 500 ejemplares que, contra todo pronóstico, se agotaron hasta el domingo 20 de abril.

Ante la gran expectativa que despertó este texto en los trabajadores del campo, las minas y las ciudades, la comisión política de la COD paceña determinó hacer imprimir, el 21 de abril, una segunda edición de 500 textos, que también desaparecieron, como agua en nuestras manos.

¿Qué sucedió? Los trabajadores de base tienen sed de conocimiento. Los obreros, las clases medias empobrecidas, los campesinos no están derrotados. Quieren respuestas inmediatas a su crítica situación económica y social. Éstas son sólo algunas percepciones que obtuvimos hablando, discutiendo y promocionando nuestro libro en las asambleas generales.

Para nosotros quedó claro que una cosa es hablar entre dirigentes y otra muy distinta dialogar con los compañeros que están mordiendo, a diario, el polvo de la

crisis estructural del país. Por eso, ahora presentamos la tercera edición de esta publicación, que se ha constituido en un instrumento de organización y reflexión.

El coordinador

La Paz, 28 de abril de 2003

COMENTARIO

LOS TRABAJADORES DAN A CONOCER SU VOZ SOBRE LA REBELIÓN DE FEBRERO*

El texto se aleja de las interpretaciones fáciles que desde los medios se han destilado e intenta más bien recuperar el sentido y la dimensión más profunda de aquellas difíciles jornadas.

Ricardo Zelaya

Un nebuloso manto de contradicciones e interpretaciones interesadas recubre los hechos del 11 y 12 de febrero. Gobierno, partidos políticos, analistas y periodistas se han encargado de tejerlo a lo largo de estos más de dos meses, dando por resultado la imposibilidad de evocarlos y comprenderlos con justeza, tal y como se presentaron ante nuestros propios ojos.

Es probablemente por esto que la Central Obrera Departamental (COD), de La Paz, con el apoyo y coordinación del periodista Miguel Pinto Parabá, la agencia digital de noticias Econoticias y el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), ha puesto en circulación un ejemplar impreso en 68 páginas bajo el sugerente título de “Lecciones del Levantamiento Popular del 11 y 12 de febrero”.

El libro, presentado el martes 15 en la Federación Sin-

dical de Trabajadores Fabriles de La Paz (FSTFLP), se aleja de las interpretaciones fáciles que desde los medios de comunicación se han destilado e intenta más bien recuperar el sentido y la dimensión más profunda de aquellas difíciles jornadas, ubicándolas en una perspectiva histórica, económica y política concreta, la perspectiva de los trabajadores.

La perspectiva global

Resulta así, por ejemplo, que los acontecimientos de febrero no son sucesos aislados o fruto del “vandalismo”, como tan frecuentemente se ha querido establecer, sino que se inscriben en un terreno mucho más amplio, el del creciente enfrentamiento entre un mundo neoliberalizado y decadente y el surgimiento de movimientos sociales que se le oponen a escala planetaria.

De hecho, el intento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de confiscar una parte del salario de la población trabajadora en un país tan empobrecido como Bolivia, a través del denominado “impuestazo”, expresa precisamente los grados de perversión y ceguera a que pueden llegar las clases dirigentes en su afán de atender las necesidades del modelo y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El modelo ha muerto y ahora sólo falta sepultarlo”, sostiene lapidariamente en el libro el economista de izquierda Pablo Ramos, quien advierte sobre la presencia

de un “corto circuito” en el patrón de acumulación de capital en el país, que “inmoviliza toda posibilidad de crecimiento y desarrollo nacional”.

De la muerte del modelo dan cuenta las propias cifras oficiales citadas en el texto de la COD paceña: en tan solo el último año, 50.000 bolivianos perdieron su empleo y otros 130.000 cayeron en las esferas de la pobreza. Más allá de la dimensión económica y global del fenómeno, el libro escarba también en los mismos hechos registrados hace dos meses, analizando y desentrañando asuntos verdaderamente candentes, como el papel cada vez más abierto y decisivo que viene asumiendo la Policía en la resolución de los conflictos sociales.

Se trata, señala el texto, de poner al descubierto “algunos de los dispositivos internos de la rebelión” de febrero. Parte de este desentrañamiento es, por ejemplo, una reveladora entrevista al mayor David Vargas, “responsable del idilio entre Policía y el pueblo”.

En esta misma perspectiva, el libro ingresa también en el análisis del rol que han cumplido los medios de comunicación en su intento por reflejar los sangrientos acontecimientos y las limitaciones de ese “poder mediático” dominado desde sus estructuras propietarias por una visión anatemizadora y a menudo prejuiciosa de la realidad.

Crítica y autocrítica

Un conjunto de interpretaciones, que incluyen al MAS de Evo Morales, al líder campesino Felipe Quispe y al Partido Obrero Revolucionario (POR) de filiación trotskista, intenta, finalmente, realizar una evaluación crítica y autocrítica de los hechos.

El criterio, más o menos coincidente que surge de estas interpretaciones, es que el levantamiento careció de una dirección política e ideológica y de la presencia de un instrumento organizativo capaz de conducir el descontento más allá del enfrentamiento. Es posible cuestionar en el libro la presentación acaso demasiado fragmentaria y ambiciosa de todos los ángulos posibles del conflicto, “demasiado periodística”, por así decirlo, pero no cabe duda de que se trata del único y mejor intento por sistematizar los hechos a partir de una visión alternativa a la de los eternos monopolizadores del poder y la política.

PRESENTACIÓN

Con el fin de realizar un balance crítico y autocrítico de la rebelión boliviana que tuvo el trágico saldo de 33 muertos a bala y cerca de 210 heridos, la Comisión Política de la Central Obrera Departamental (COD), de La Paz, organizó el “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”, que se realizó en la “Casa de Retiros del Padre Damián”, en la ciudad de La Paz, el 25 y 26 de febrero.

Este evento contó con la participación activa de más de 350 dirigentes de todo el país, y fue la continuación de la “reunión conjunta de emergencia” de la COD, de La Paz, el Bloque Sindical Antineoliberal y el Estado Mayor del Pueblo, que analizó, en Cochabamba, el domingo 16 de febrero, la grave coyuntura política del país.

La sede del “Encuentro Nacional”, lamentablemente, quedó pequeña para albergar a decenas de intelectuales, universitarios, trabajadores de base, militantes de partidos políticos, policías, militares y dirigentes que quisieron participar de las deliberaciones. Muchos no pudieron ingresar a la reunión. Esta es una de las razones principales que nos llevó a plasmar en el papel las **“LECCIONES DEL LEVANTAMIENTO POPULAR DEL 12 Y 13 DE FEBRERO”**.

Es preciso aclarar que esta especie de gran reportaje, en blanco y negro, es una producción colectiva.

Subrayamos la invalorable colaboración que se recibió

de los responsables del periódico digital **econoticias-bolivia.com** (Gabriel Tabera y Vania Solares) que hicieron el seguimiento noticioso del alzamiento popular del 12 y 13 de febrero y del “Encuentro Nacional”. Sin su material informativo hubiera sido imposible la publicación de este texto sencillo.

Agradecemos, también, el apoyo que recibimos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que financió la impresión de quinientos ejemplares de esta obra. Aclaremos que todas las recaudaciones que provengan de la venta de estos textos irán a un “fondo de publicaciones” de la Escuela Sindical de la COD-La Paz “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, como decidió el último Congreso Ordinario de los trabajadores del departamento.

Destacamos, igualmente, la cooperación de los reporteros gráficos Jorge y Sergio Landaeta, quienes nos permitieron bucear en su gigantesco archivo digital, donde descubrimos históricas fotografías acerca de los acontecimientos de febrero.

Nos sentiremos enormemente recompensados si estas páginas llegan a convertirse en manos de los trabajadores de base y sindicalistas en instrumentos de reflexión y organización, que, después, los lleve a empujar al país hacia una realidad más justa y solidaria, sin explotados y sin explotadores.

Miguel Pinto Parabá
Coordinador

INTRODUCCIÓN

LA ECLOSIÓN SOCIAL BOLIVIANA Y SU RAÍZ ANTIIMPERIALISTA

El levantamiento popular boliviano del 12 y 13 de febrero se desarrolló dentro de un contexto internacional caracterizado por la lucha entre dos mundos: 1) el mundo guerrero y depredador del capital y 2) los movimientos sociales de resistencia que están en ascenso. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el gobierno estadounidense dio un viraje en su política internacional, que ahora se caracteriza por ser eminentemente guerrera.

Desde entonces, quedó claro que la **“doctrina imperialista de George W. Bush”**, como explicó el escritor y docente universitario de Estados Unidos, James Petras, tiene seis características particulares:

- 1) Es ofensiva, porque Estados Unidos se está jugando la vida con este proyecto y, por lo tanto, no tendrá contemplaciones con los países y movimientos sociales que se le pongan al frente.
- 2) Habla de “guerras permanentes” en todo el mundo.
- 3) Toma decisiones militares unilaterales.
- 4) Su política militar recolonizadora está relacionada estrechamente con el “capital especulativo (el banquero)” y el “capital extractivo (apuntalado por las empre-

sas transnacionales)”, que no genera empleo.

5) Es elitista, pues no tiene consenso internacional ni dentro de su propio país.

6) Es depredadora, porque busca la captura del excedente económico a través de la fuerza.

En este marco, la invasión que el gobierno estadounidense desató en Irak es un ejemplo concreto de la forma como opera, en 2003, la doctrina imperialista de Bush. El poder sobre la segunda reserva de petróleo del mundo, la baja de su precio a 20 dólares por barril —para que esto ayude a Estados Unidos a salir de su aguda crisis de sobreproducción—, y la liquidación física del “integrismo islámico” —que tiene fuertes tendencias antiimperialistas—, son los fines últimos de esta guerra depredadora.*

Estados Unidos, un gigante con pies de barro

En América Latina, uno de los mecanismos clásicos que Estados Unidos utiliza con éxito para poner de rodillas a los gobiernos neoliberales es la deuda externa. Para aplicar sus políticas económicas y militares presiona a sus “acreedores” a través del Banco Mundial, el

* **Nota:** Véase Oscar Vargas, (2003): “Salir de la recesión bajando el precio del crudo a 20 dólares”, Informe Especial, de La Prensa, La Paz, 20/03/03.

Fondo Monetario Internacional y otros aparatos de control estadounidenses.

Empero, en el último año y medio, el imperio del norte ha radicalizado su estrategia ya puesto en marcha otras medidas anexionistas, como, por ejemplo, el ALCA, la construcción de bases militares y el respaldo a la guerra “contrainsurgente” en toda Latinoamérica. El viraje, igualmente, tiene rasgos belicistas.

La política guerrera de la Administración Bush, sin embargo, tiene su talón de Aquiles. Según Petras, la crisis económica de Estados Unidos es tal que su gobierno está obligado a “chupar (a sus nuevas colonias) mil millones de dólares diarios para superar su déficit fiscal”. Este hecho ha azuzado sus conflictos sociales internos y, al mismo tiempo, ha polarizado la lucha de clases en toda América Latina.

Los obreros, campesinos y clases medias empobrecidas de todo el continente están viviendo un acelerado proceso de radicalización, que los ha impulsado a organizar movimientos sociales que tienen hondas raíces antiimperialistas y en algunos casos anticapitalistas. Y es en esta cadena de hechos continentales donde surge, con virulencia, el levantamiento popular boliviano del 12 y 13 de febrero, con todas las características que se exponen en los 19 artículos de este texto.

El alzamiento social de febrero, en el fondo, es parte de la lucha antagonica entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.

Crisis estructural

En los artículos **“Bolivia, una fábrica de hacer pobres y rebeldes”**; **“Gobierno intentó sacrificar el salario del pueblo”**, e **“Impuestazo al salario, un imposición del FMI”** se muestra, con datos oficiales, la crítica situación económica y social del país y la forma cómo el gobierno pretendió confiscar una parte del salario de los trabajadores. Aquí queda al descubierto el detonante que hizo estallar la eclosión social de febrero.

Luego, dos analistas económicos hacen un puntilloso balance acerca de la bancarrota del modelo neoliberal-capitalista. En los textos informativos **“Analista económico: se agotó el modelo, ahora hay que sepultarlo”**; **“Endeudamiento externo, una nueva calamidad”**, y **“La quiebra fiscal”** se esbozan también algunas pistas para reemplazar el actual sistema económico.

Apoyados con reveladoras fotografías, los artículos **“Los rebeldes de uniforme”**; **“El policía rebelde que derrotó el impuestazo del FMI”**; **“Hermano contra hermano”**; **“El poder mediático en Bolivia”**, y **“Democracia neoliberal: sangre, violencia e impunidad”** exponen algunos dispositivos internos de la rebelión.

Varios sectores sociales, al final, realizan, desde diversos puntos de vista, la crítica y la autocritica de los acontecimientos del 12 y 13 de febrero. En **“Sindicatos y revolucionarios: no estuvimos a la altura de los**

acontecimientos”; “MAS: la solución viene de abajo”; “Mallku: trabajamos para hacer caer al gringo”; “Golpe de Estado o salida popular”; “Los cinco desafíos del movimiento antineoliberal”; “Lecciones del levantamiento popular boliviano”; “Trotskistas: es hora del gobierno obrero campesino”, y “Crisis sindical: dirigentes de la COB quedan al descubierto” se revelan las fortalezas y debilidades del envalentonado movimiento social boliviano.

En fin, esta sencilla obra es un amplio balance de la crisis estructural del país hecho por los trabajadores y para los trabajadores.

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA COD LA PAZ

La Paz, 26 de marzo de 2003

BOLIVIA, UNA FÁBRICA DE HACER POBRES Y REBELDES

En el país, 350 mil personas carecen de empleo y tienen un ingreso cero; cada día tres mujeres mueren al dar a luz por falta de atención médica; la tasa de mortalidad infantil alcanza a 67 por cada mil niños nacidos vivos; la desnutrición en niños menores de 3 años es del 28 por ciento, y el gobierno quiso imponer un “impuestazo”.

(Econoticiasbolivia.com)

El modelo boliviano se ha convertido en una verdadera fábrica generadora de pobreza y rebeldía. En el último año casi 130 mil bolivianos cayeron en la pobreza, más de 50 mil perdieron el empleo y el ingreso per cápita y el salario tocaron fondo. Solo trepó el descontento y el malestar social que fueron los ejes de la revuelta popular que conmocionó Bolivia.

Las cifras oficiales de la debacle económica y social, agravadas en extremo en los últimos años, muestran que el último trienio, entre 1999 y 2001, más de 380 mil personas cayeron en la pobreza y la marginalidad, según el recuento de la estatal Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE).

La indigencia y miseria crecieron vertiginosamente, especialmente en el área urbana, por lo que la proporción

de ciudadanos que sobrevive con menos de un dólar al día se ensanchó hasta alcanzar a más de la cuarta parte de la población. Oficialmente se estima que por lo menos cinco de los ocho millones de bolivianos son pobres, estando la mitad de ellos en un estado de indigencia y miseria.

De 1998 a 2002, el ingreso per cápita cayó en casi una quinta parte. Según datos del Ministerio de Hacienda, el ingreso per cápita anual, en 1998, era de un poco más de 1.100 dólares y en 2002 solo 900 dólares.

La evaluación de la UDAPE establece que “los últimos cuatro años han sido de intensa crisis económica en toda Latinoamérica y que en Bolivia se tuvo un crecimiento promedio del PIB de 1,6 por ciento, mientras que el nivel de crecimiento poblacional alcanzó el 2,3 por ciento, lo que significa una tasa negativa de crecimiento per cápita en ese lapso”.

“Esta situación ha tenido un efecto devastador sobre el sector productivo, particularmente en la industria manufacturera. Uno de los datos que más impacta de esta situación es que una creciente proporción de la población vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza”.

Muchos de ellos, desempleados, trabajadores, niños de la calle, estudiantes y obreros con míseros salarios, participaron en la revuelta cívico-policial, que hizo tambalear al régimen neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, durante la segunda semana de este febrero loco.

Injusticia social

La bronca de los de abajo se estrelló contra las instituciones del Estado, los partidos neoliberales y contra sectores empresariales, revelando el enorme abismo que existe en Bolivia entre los sectores más acaudalados de la población y los más pobres. Esta profunda brecha económica y social se ensanchó en los últimos años con la caída del salario real y del ingreso per cápita, que impactó con mayor rigor en los sectores más pobres y desprotegidos.

Esta aguda desigualdad en la distribución del ingreso ha convertido a Bolivia en uno de los países con más inequidad económica y social. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia es el prototipo latinoamericano de la desigualdad: la mayor parte de la población subsiste en la extrema pobreza, mientras un puñado de personas concentra la mayor parte de la riqueza.

Esta injusta distribución de la riqueza se ahondó desde la aplicación del modelo neoliberal, en agosto de 1985. Los datos oficiales muestran que actualmente la quinta parte de los hogares más ricos recibe ingresos casi 50 veces superiores al de la quinta parte más pobre. El 10 por ciento de la población más acaudalada, entre los que se encuentra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la mayor parte de sus colaboradores, concentra un tercio del ingreso nacional y tiene más dinero que el

obtenido en conjunto por el 70 por ciento de la población, compuesto principalmente por indígenas, campesinos, trabajadores informales, obreros y mujeres.

Desempleo e informalidad

Este mayoritario segmento de la población empobrecida está asentado básicamente en las microempresas y en la informalidad. El 65 por ciento de la población económicamente activa está inmerso en el autoempleo de subsistencia familiar y en la informalidad. El 83 por ciento de la población económicamente activa trabaja en las micro y pequeñas empresas, con bajísimos niveles de productividad y que sobreviven solo por la autoexplotación y el sacrificio familiar.

Sufriendo como ellos, están otros 350 mil bolivianos que carecen de empleo y tienen un ingreso cero. Cerca de otro millón de trabajadores tiene un empleo de baja calidad y gana por debajo de lo que se necesita para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos y servicios básicos.

Sobre este sector de asalariados, el gobierno boliviano quiso, bajo la presión del FMI, descargar el peso de la crisis fiscal, a través de un impuesto al salario, lo que encendió la chispa de la convulsión social.

Para los de abajo, era claro que el gobierno intentaba financiar, con el dinero de los asalariados y de los más pobres, el despilfarro gubernamental, la inocultable y

extendida corrupción de los gobernantes y la masiva defraudación tributaria que hacían empresarios nacionales y transnacionales petroleras.

El impuestazo del gobierno de los millonarios era inaceptable para un país donde cada día tres mujeres mueren al dar a luz por falta de atención médica, donde la tasa de mortalidad infantil alcanza a 67 por cada mil niños nacidos vivos y la desnutrición en niños y niñas menores de 3 años es del 28 por ciento.

La rebeldía de los de abajo también se alimenta al constatar que por lo menos uno de cada cinco bolivianos está desnutrido, que una de cada cuatro niñas y niños tiene una estatura baja para su edad, que el cinco por ciento de las niñas y niños nacen con bajo peso y que una de cada cuatro mujeres bolivianas en etapa de gestación sufre de anemia por tener una deficiente alimentación. Y ni hablar de la economía campesina y del área rural, donde solo se cosecha pobreza, amargura y rebelión social.

Por eso, el impuestazo fue la gota que rebalsó el vaso. Las víctimas del modelo neoliberal devolvieron el golpe, frenaron la confiscación de parte de los salarios y refrendaron con sangre una advertencia: ya no están dispuestos a más sacrificios para salvar al modelo neoliberal en Bolivia de la bancarrota.

EL GOBIERNO INTENTÓ SACRIFICAR EL SALARIO DEL PUEBLO

Junto con el “impuestazo”, el proyecto dispuso un tratamiento favorable para los empresarios, al disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 al 12,5 por ciento y el Impuesto a las Transacciones (IU) del 3 al 2,5 por ciento.

(Econoticiasbolivia.com)

Fue un atentado a la economía popular. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anunció, el domingo 9 de febrero, su intención de confiscar parte de los salarios e ingresos de los trabajadores y empleados del sector público y privado en una proporción que va desde el 4,2 al 12,5 por ciento.

En su mensaje a la nación, transmitido por una red de canales televisivos, Sánchez de Lozada comunicó que Bolivia marcha al colapso si el Estado continúa gastando más de lo que tiene. El déficit fiscal del 2002 fue superior al 8,5 por ciento y para el 2003 se pretendió, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), reducirlo a un poco más del 5 por ciento, recortando los gastos del Estado e incrementando sus ingresos a través de mayores contribuciones y sacrificios del sector laboral.

Con el denominado “impuestazo”, trabajadores, obre-

ros y empleados de clase media tenían que entregar parte de sus ingresos al Estado en la siguiente proporción:
INGRESO % IMPUESTO DESCUENTO

Hasta 880 Bs.	0	0
1.320 Bs.	4,2	55 Bs.
1.760 Bs.	6,3	110 Bs.
2.000 Bs.	7,0	140 Bs.
3.000 Bs.	8,8	265 Bs.
4.000 Bs.	9,8	390 Bs.
5.000 Bs.	10,3	515 Bs.
6.000 Bs.	10,7	640 Bs.
8.000 Bs.	11,1	890 Bs.
10.000 Bs.	11,4	1.140 Bs.
20.000 Bs.	12,0	2.390 Bs.
29.000 Bs.	12,1	3.628 Bs.

El presidente también anunció que durante 2003 no iba a dar paso a las demandas de aumento salarial planteadas por las organizaciones sociales y laborales.

“Hay un sacrificio adicional (...), no vamos a aumentar sueldos ni salarios”, aseguró Sánchez de Lozada y anunció que tampoco iba a conceder incrementos en el presupuesto de las universidades públicas.

En el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2003, Sánchez de Lozada planteó adicional-

mente el recorte del 10 por ciento en los gastos del gobierno nacional, del Congreso y del Poder Judicial.

Pero junto a la mayor contribución que debían erogar los asalariados, el presupuesto dispuso un tratamiento favorable para los empresarios al disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 al 12,5 por ciento y el Impuesto a las Transacciones (IU) del 3 al 2,5 por ciento.

Según el presidente Sánchez de Lozada, con esa rebaja se devolvía a la economía 280 millones de bolivianos y se hacían más competitivas a las empresas, que podían mejorar su crítica situación y rebajar los precios de sus productos.

IMPUESTO AL SALARIO, UNA IMPOSICIÓN DEL FMI

El déficit fiscal del 2002 llegó al 8,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Los ingresos fiscales se han erosionado y los gastos se han disparado hacia arriba, generando una creciente brecha que fue cuestionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

(Econoticiasbolivia.com)

Con la plata de los de abajo y por mandato del FMI, el gobierno boliviano intentó desactivar la bomba fiscal que amenaza con hacer estallar sus frágiles finanzas.

Del bolsillo de los asalariados, obreros y empleados del sector público y privado, el gobierno neoliberal pretendió sacar casi 90 millones de dólares durante la gestión 2003, monto que le permitiría eliminar el 30 por ciento del abultado déficit fiscal, que ha crecido aceleradamente por el despilfarro gubernamental, la inocultable corrupción del aparato estatal, los excesivos gastos de la alta burocracia y la reforma neoliberal del sistema de pensiones.

El déficit fiscal del 2002 ha sido del 8,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel insostenible para una economía tan diminuta y endeble como la boliviana. Los ingresos fiscales se han erosionado y los gastos se han disparado hacia arriba, generando una

enorme brecha que fue cuestionada por el FMI. Bajo la presión de este organismo, que casi siempre marca la agenda y el norte de lo que se hace en Bolivia, el gobierno anunció la reducción del déficit hasta el 5,5 por ciento del PIB para la gestión 2003.

En esta línea, de reducir gastos e incrementar ingresos, Sánchez de Lazada solicitó al Congreso boliviano la aprobación respectiva para confiscar parte de los ingresos y salarios de los trabajadores y empleados en una proporción que va desde el 4,2 por ciento al 12,5 por ciento. La aprobación de esta medida era inminente, dada la mayoría congresal que ostenta el gobierno, aunque nunca se descartó que el repudio generalizado de la población ante el denominado “impuestazo” pueda hacerla retroceder, por lo menos en alguna proporción. Otro mecanismo previsto para reducir el déficit fiscal fue el mayor aporte tributario exigido a las petroleras extranjeras que operan en Bolivia. De ellas, el gobierno pretendió obtener alrededor de 75 millones de dólares adicionales, monto que equivale al 25 por ciento del recorte del déficit.

Esta nueva contribución exigida a las petroleras fue recibida con malestar por las empresas transnacionales, las que sin embargo no han quedado tan mal paradas en su relación con el Estado boliviano, ya que denuncias públicas de los propios funcionarios de gobierno daban cuenta que estas petroleras anualmente defraudan en impuestos cerca de 120 millones dólares al fisco.

SINDICATOS Y REVOLUCIONARIOS: NO ESTUVIMOS A LA ALTURA DE LOS ACONTECIMIENTOS

Tres días después del levantamiento popular del 12 y 13 de febrero, el movimiento obrero y popular realizó la primera crítica y autocrítica de su accionar. Coincidieron en que la eclosión social estuvo marcada por la nítida ausencia de una dirección política revolucionaria.

Miguel Pinto Parabá

(Econoticiasbolivia.com)

Organizaciones obreras departamentales y nacionales que se reunieron con la dirección del “Estado Mayor del Pueblo”, el domingo 16 de febrero, en Cochabamba, para evaluar la candente coyuntura económica y social del país, coincidieron en un hecho: la última sublevación social boliviana fue “espontánea”, porque no hubo dirección sindical ni política organizada.

A la hora de hacer el balance, todos los dirigentes sindicales y militantes de partidos revelaron que fueron “sorprendidos” por el motín policial y el levantamiento social del 12 y 13 de febrero, que tuvo un saldo de 33 muertos a bala y más de doscientos heridos.

El máximo líder del Movimiento al Socialismo (MAS),

Evo Morales; el dirigente de la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera; el ejecutivo nacional del Magisterio Urbano, Estanislao Aliaga, y el representante de las Centrales Obreras Departamentales (CODes) del país, Genaro Torrico, reconocieron “autocríticamente” que ninguna de las organizaciones a su mando ni la gubernamental Central Obrera Boliviana (COB) coordinaron acciones para dirigir este movimiento.

Sin embargo, varios ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aseguraron lo contrario. A través de varias conferencias de prensa acusaron primero al MAS, luego al “Estado Mayor del Pueblo” y finalmente a otras organizaciones departamentales y sociales de ser las “responsables” de las violentas jornadas de la semana pasada e incluso las involucraron en un supuesto “golpe de Estado”.

Las causas

De acuerdo a los dirigentes sindicales que se reunieron el 16 de febrero en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, el levantamiento popular tiene raíces históricas.

La vertical aplicación del modelo de libre mercado (desde agosto de 1985), que desarrolló altas tasas de pobreza y desempleo, generó las condiciones materiales para una eclosión social, que se viene revelando en el país, con matices cada vez más virulentos, desde los

movimientos sociales de abril y septiembre de 2000. Los últimos datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) revelan que en los cinco años de gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002) el número de muertos en los conflictos sociales ascendió a 80, mientras que el actual régimen, en sólo seis meses, ya tiene en su haber 57 muertos.

Otro dirigente afirmó que el gobierno no es que no quiere sacar al país de la crisis, sino que materialmente “no puede”, porque, desde la privatización de las principales empresas estatales y su entrega a las transnacionales, los recursos que ingresaban al Tesoro General de la Nación (TGN) disminuyeron paulatinamente.

La política de erradicación de la hoja de coca también disminuyó el flujo de circulante en todo el país, lo cual no fue subsanado por los planes de “desarrollo alternativo”, agregó, a su turno, el dirigente de los cocaleros de los Yungas, Dionisio Núñez.

“La espontánea sublevación se estrelló contra 17 años de opresión. El neoliberalismo murió y las políticas impuestas por el FMI fracasaron”, dijo Óscar Olivera.

Para algunos sectores radicales, sin embargo, lo que ocurrió la semana anterior es, en el fondo, producto de la “bancarrota” del sistema capitalista boliviano, que ingreso en una profunda crisis.

Otros dirigentes hicieron notar que, cuando la propiedad privada se encuentra en peligro, los propietarios, inevitablemente, dan un viraje hacia posiciones con-

servadoras. Tomaron como ejemplo el radical cambio de discurso que experimentaron los líderes de las Confederaciones de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), antes y después del levantamiento popular. Con el fin de evitar un nuevo “impuestazo”, “paquetazo”, “gasolinazo”, “corralito” u otra medida que pretenda reducir el alto déficit fiscal, según los sindicalistas, los bolivianos deben lanzar la propuesta de la “reversión” de todas las empresas privatizadas desde 1985. Esta idea recibió aplausos y amplio respaldo de los cerca de cincuenta asistentes a la reunión.

Vándalos o antisistémicos

Otro tema que se analizó a profundidad fue la presunta participación de “delincuentes”, “vándalos” y “franco-tiradores” en las jornadas del 12 y 13 de febrero.

Los niños y jóvenes que “en masa” saquearon y quemaron entidades estatales, sedes de partidos políticos y entidades bancarias, en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, no son “vándalos” ni “delincuentes”, como afirman equivocadamente la mayor parte de los medios de información comercial, sino son grandes grupos de jóvenes que no encuentran alternativas bajo el actual sistema económico, afirmó el profesor Estanislao Aliaga, luego de explicar que los manifestantes prácticamente “apedrearon y quemaron iconos del poder económico y político boliviano”.

El ataque al Palacio de Gobierno, la Vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo, prefecturas, bancos de propiedad de conocidos políticos, la Alcaldía de El Alto, empresas transnacionales y privatizadas, y las sedes de los partidos políticos en función de gobierno estuvo, aparentemente, guiada por un nivel de conciencia.

Para los asistentes a la reunión, el tema de los “francotiradores” quedó claro. Estos “asesinos a sueldo”, en realidad, son “paramilitares” dirigidos por el gobierno y la Embajada Norteamericana, denunció el dirigente obrero de la sede de gobierno, Genaro Tarrico, quien fue respaldado por varios participantes.

Evo Morales, basado en “informes de militares patriotas”, denunció que los francotiradores tenían el objetivo de liquidar a los cabecillas de los policías amotinados y algunos dirigentes sindicales radicales.

Unas imágenes televisivas presentadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APD-HB) muestra que fueron los propios militares quienes dispararon contra jóvenes, trabajadores y dos paramédicos de la Cruz Roja, el 13 de febrero.

Debilitamiento del aparato represivo

Otra conclusión a la que llegaron los sindicalistas fue que el levantamiento popular del 12 y 13 de febrero hizo “explotar el aparato represivo del Estado boliviano”. La tropa policial, apoyada por algunos “oficiales

progresistas” derrotó el “impuestazo” al salario y puso en jaque al Ejército.

Se conoció también que los suboficiales y sargentos de algunas guarniciones militares del departamento de La Paz se “negaron” a salir a las calles para reprimir a los sublevados.

Los medios de comunicación, para la mayoría de los asistentes, jugaron un rol “negativo y progubernamental” en el conflicto. Se ocuparon de caracterizar al levantamiento como un movimiento “vandálico y delincuencia”, para justificar una mayor represión. Acerca de este tema no se sacó conclusiones y se planteó que sea un punto de urgente análisis en el encuentro que se realizará en la ciudad de La Paz.

Pero, todo este movimiento popular estuvo marcado por una característica central: la nítida ausencia de una dirección política y sindical. Una sentida necesidad que también será analizada, a mayor profundidad, en un “Encuentro Social Nacional” que se desarrollará en La Paz, el 25 y 26 de este mes.

Los militantes del MAS, la dirección del Estado Mayor del Pueblo y otras organizaciones sindicales y sociales no negaron esta crítica, que fue casi unánime, en el sentido que sus cuadros políticos “no estuvieron a la altura de los acontecimientos”.

Un grupo de dirigentes lanzó también dardos contra el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), encabezado por el dirigente campesino Felipe Quispe. Criticaron

acrememente la ausencia del controvertido “Mallku” y el analista político, Álvaro García Linera, quienes, en el momento del conflicto, se encontraban de visita en México.

Olivera, Torrico y Morales, al filo del encuentro, plantearon la idea de organizar un nuevo “órgano de poder”, la “asamblea popular constituyente”; empero, esto quedó también en el tapete de discusión.

Documento de conclusiones

Luego del debate de cerca de cuatro horas, se convocó a una conferencia de prensa para presentar un pronunciamiento colectivo de siete párrafos. Entre los puntos más sobresalientes, se ratificó el pedido de “renuncia del presidente y vicepresidente de Bolivia; se determinó continuar las movilizaciones y vigili­as en las carreteras; se decidió otorgar un plazo hasta fin de mes para dar solución a los pedidos de varios sectores sociales; y se denunció a la comunidad internacional la intención del gobierno de someter a los dirigentes de las organizaciones sindicales antineoliberales a “procesos penales” por haber participado en el levantamiento social de la semana anterior.

ANALISTA ECONÓMICO: SE AGOTÓ EL MODELO, AHORA HAY QUE SEPULTARLO

Los ideólogos del neoliberalismo pensaban que, al retirar al Estado de las actividades productivas, los empresarios privados nacionales y extranjeros iban a sacar al país de la crisis. Pasaron 18 años y esta teoría, al chocar con la realidad, se hizo trizas.

(Econoticiasbolivia.com)

El modelo neoliberal boliviano está totalmente agotado y solo resta enterrarlo, aseguró el economista de izquierda Pablo Ramos, que ve un cortocircuito en el proceso de acumulación de capital que inviabiliza toda posibilidad de crecimiento y desarrollo nacional.

El ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) explicó que la actual crisis económica y social que vive Bolivia es producto del agotamiento de las políticas neoliberales que no pudieron, desde su aplicación, en agosto de 1985, impulsar el crecimiento económico ni reactivar los sectores productivos ni menos generar un proceso de desarrollo nacional.

“El único mérito del actual modelo es haber abatido la hiperinflación y haber logrado una temporal y precaria estabilización”, dijo durante el “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”, que se realizó en la ciudad de La Paz, el 25 y

26 de febrero, y en el que participaron representantes de las más importantes organizaciones sindicales y sociales del país.

La quiebra del modelo boliviano es, según Ramos, estructural. En los últimos años, Bolivia ha recibido millonarios ingresos desde el exterior, como nunca en su historia, pero, paradójicamente, dentro del país cae la producción, aumenta el desempleo y disminuye el ingreso de los ciudadanos.

Entre 1985 y el 2000 el país obtuvo un ingreso de 13.685 millones de dólares, provenientes de la inversión extranjera, donaciones y préstamos de los organismos internacionales. Ese millonario flujo de recursos no permitió, sin embargo, impulsar las actividades productivas ni reactivar la economía. Por el contrario, las condiciones de vida y de trabajo empeoraron al igual que la situación de la industria, la agricultura, la minería, la construcción, el comercio y los servicios.

Esta grave contradicción (Bolivia recibe mucho dinero, pero su economía es cada vez más débil y su población más pobre) muestra, según Ramos, que los millonarios recursos están siendo canalizados, manejados y apropiados por las empresas transnacionales y los sectores políticos y sociales que los respaldan.

Crisis de los empresarios

Los inversionistas extranjeros están ganando a manos

llenas. Están inflando sus costos y gastos para pagar muy poco en impuestos y en dividendos a los bolivianos, y así se están llevando fuera del país los millones que ganan explotando recursos naturales no renovables. Las transnacionales no están reinvertiendo en Bolivia y esa es la gran falla de modelo, explicó Ramos. Los ideólogos del neoliberalismo pensaban que al retirar al Estado de las actividades productivas, los empresarios nacionales y extranjeros iban a tener, desde 1985, el campo libre para hacer buenos negocios, llenarse de dinero y, posteriormente, reinvertir en el país, desarrollando la producción, generando más riqueza y empleo. Pero esa teoría no se hizo realidad, por lo menos en lo que interesa a los bolivianos. En su generalidad, los empresarios nacionales, por su extrema debilidad, no pudieron hacer grandes negocios y, por el contrario, muchos de ellos están en bancarrota. Las transnacionales sí hicieron negocios de magnitud, pero están sacando el excedente y las riquezas a sus países de origen. Por ello, el actual proceso de acumulación de capital esta descapitalizando y empobreciendo a Bolivia e impidiendo su crecimiento y desarrollo.

“El modelo neoliberal provoca, además, la informalización de la fuerza de trabajo, la desindustrialización del país y profundas crisis en el área fiscal y comercial.”

Según Ramos, el neoliberalismo está destruyendo a Bolivia y a los bolivianos, por lo que urge sepultarlo y reemplazarlo con un nuevo sistema económico y so-

cial más humano, más productivo y que sea capaz de generar las condiciones para un mayor bienestar para la población.

ENDEUDAMIENTO EXTERNO, UNA NUEVA CALAMIDAD

Cada año, Bolivia destina aproximadamente 300 millones de dólares para pagar los intereses y amortizar parte del capital de la deuda externa. Con los nuevos préstamos, el erario nacional tendría que erogar cerca de 600 millones anuales. La nueva deuda será pagada con el gas.

(Econoticiasbolivia.com)

Sin poder ocultar el agotamiento de su modelo económico, el gobierno boliviano está apostando sus cartas de sobrevivencia a un mayor endeudamiento externo, que puede ser una nueva y fatal calamidad para el país, advirtió el economista y exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Pablo Ramos.

“Nos están llevando por el peligroso camino del endeudamiento externo e interno”, dijo el especialista al dar a conocer que los gobernantes tramitan créditos por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares, como única vía para financiar su plan económico y superar los graves déficits financieros y fiscales.

Con este monto, la deuda externa boliviana virtualmente se duplicaría, al igual que el oneroso servicio que se paga anualmente a los acreedores externos. Cada año, Bolivia destina aproximadamente 300 millones de

dólares para pagar los intereses y amortizar parte del capital. Con los nuevos préstamos, el erario nacional tendría que erogar cerca de 600 millones de dólares anuales, cifra que es superior a todos los recursos que el Estado destina como inversión pública, lo que es insostenible en el mediano y largo plazo.

“La deuda externa ha sido y es una calamidad para los países pobres, que se ven obligados a comprometer sus recursos naturales. La nueva deuda será pagada con el gas boliviano”, dijo el especialista, quien cree que Bolivia está a punto de repetir la vieja historia de los años 70 cuando los países latinoamericanos se veían en el trance de “exportar o morir para pagar la deuda externa”.

Los estudios oficiales y de entidades privadas sobre el endeudamiento externo en Bolivia coinciden en que, históricamente, los préstamos del exterior han beneficiado muy poco a la economía nacional y a los bolivianos y que, en su mayor parte, han servido para financiar los gastos dispendiosos de la alta burocracia estatal y para acrecentar múltiples formas de corrupción y enriquecimiento ilícito de los gobernantes. Por las condiciones, plazos y modalidades de los créditos, la deuda externa se ha convertido en uno de los más grandes escollos para el crecimiento y desarrollo nacional.

“Pagamos y pagamos, pero la deuda no disminuye y más bien crece”, aseguró Ramos, quien cree que los programas de alivio de la deuda, reprogramaciones y

condonaciones parciales realizadas en el pasado en beneficio del país por los acreedores externos no han servido de mucho para resolver este problema, que puede agravarse a extremos insostenibles si el gobierno persiste en su política de mayor endeudamiento.

LA QUIEBRA FISCAL

La profunda crisis fiscal que vive Bolivia está expresando la quiebra del modelo neoliberal. La política económica ha perdido el norte. Es necesario recuperar las ganancias y ingresos de la explotación del gas natural, de la minería y de la agricultura comercial del oriente.

(Econoticiasbolivia.com)

El modelo neoliberal ha quebrado las finanzas bolivianas y ha generado una profunda crisis fiscal y la debacle de los sectores productivos, aseguró el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze.

En su disertación sobre la crisis fiscal en el “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”, Arze explicó que el modelo de libre mercado, inaugurado con el Decreto Supremo 21060, del 29 de agosto de 1985, está virtualmente agotado.

La situación es insostenible en el campo de las finanzas públicas. Los ingresos del Estado se han erosionado y los gastos tienen una tendencia creciente, lo que genera un déficit cada vez más abultado y peligroso.

Actualmente, el Estado ya no puede sostenerse con los impuestos porque gran parte de la economía nacional funciona en la informalidad y en el precapitalismo.

Además, según Arze, el sistema tributario es demasiado inequitativo: afecta a los trabajadores y a los consumidores que son los que más pagan impuestos, pero no a las empresas. “Los empresarios virtualmente no pagan impuestos.”

El analista explicó que la insostenibilidad en los ingresos fiscales se agrava en la medida que es el propio modelo económico el que socava sus bases de sustentación. “El modelo ha profundizado el deterioro del aparato productivo nacional y ha desindustrializado al país. Tenemos una industria poco relevante, muy débil. El modelo acabó con muchas industrias y gran parte de la industria formal ha sido reemplazada por las unidades productivas informales, que no pagan impuestos.”

En este escenario, el especialista considera que los ingresos tributarios pagados por la población no pueden aumentar más. “Creo que la presión tributaria (porcentaje de la recaudación tributaria sobre el producto interno bruto) ha llegado a su límite. En 1985 era del 2 por ciento del PIB y el 2002 fue de 15 por ciento, lo que ha significado que la gente sacrifique su consumo para pagar impuestos.”

Ante la imposibilidad de aumentar los tributos, por la resistencia de la población empobrecida, el gobierno busca financiar sus gastos mediante la contratación de nueva deuda externa e interna, que sin embargo generaran nuevos problemas para la economía nacional, advirtió Arze.

Para el economista del CEDLA, la profunda crisis fiscal que vive Bolivia está expresando la quiebra del modelo neoliberal. “La política económica ha perdido el norte del desarrollo. La política neoliberal está asentada en la mayor explotación de la fuerza de trabajo, en la mayor apropiación del ahorro de los trabajadores y no en ingresos legítimos, Por ello, se debe recuperar el rol productivo del Estado y modificar el financiamiento estatal: ya no se puede presionar más a los trabajadores y consumidores. También es necesario recuperar las ganancias e ingresos de la explotación del gas natural de la minería y de la agricultura comercial del oriente”.

LOS REBELDES DE UNIFORME

La historia de los motines policiales se remonta a la década del cuarenta. En los cuarteles, la explotación es peor que en las fábricas y cada día se atiza el descontento y la lucha de clases. El 11 y 12 de febrero, los policías, junto con el pueblo, resquebrajaron los cimientos del Estado.

(Gonzalo Trigoso* y Econoticiasbolivia.com)

Cuartel policial del Grupo Especial de Seguridad (GES), a media cuadra del Palacio de Gobierno, en La Paz. Abril del 2000. La tropa amotinada discute con pasión si se acepta la propuesta gubernamental de incrementar sus salarios en 50 por ciento o, si por el contrario, se toma por asalto el Palacio. Fusil en mano, uno de los amotinados pregunta: ¿y qué haremos cuando tomemos el Palacio? La respuesta a coro es contundente: ¡entregarlo a los obreros y los campesinos! La discusión sube de tono: unos hablan de guerra civil, otros de que los dirigentes obreros están vendidos al gobierno.

* **Nota del Editor:** Gonzalo Trigoso es abogado laboralista y asesor jurídico de la tropa policial. Participó activamente en los amotinamientos, a pedido de los uniformados. Fue invitado como expositor al “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”.

Finalmente se decide aceptar el aumento salarial y los amotinados bajan las armas.

El motín policial del 2000 es apenas una parte de la lucha social que se libra en el interior del aparato represivo del Estado. La tropa y suboficiales de baja graduación sobreviven en condiciones precarias, con salarios de hambre, sin beneficios sociales ni ascensos. En los cuarteles, la explotación es mayor que en las fábricas y cada día se atiza el descontento y la lucha de clases. La historia de los rebeldes de uniforme es de larga data y se remonta a los años posteriores a la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando comienza la profesionalización y organización moderna de esa institución.

Entre revoluciones y motines

Así, está grabada en la historia nacional, que el golpe militar nacionalista del teniente coronel Gualberto Villarroel —apoyado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la lógia militar Razón de Patria (RADEPA)— de diciembre de 1943 fue iniciado y vanguardizado por la policía de tránsito, los humildes “varitas”. Fueron también los dos regimientos de carabineros los que se batieron a muerte y hasta el final en su cuartel de la calle Calama, el 21 de julio de 1946, cuando la rosca minero-feudal colgó a Villarroel.

Años más tarde, en la Revolución del 9 de abril de 1952, la policía jugó un papel protagónico desde el

principio junto a los comandos militarizados del MNR, el proletariado minero-fabril y los universitarios. Los regimientos policiales sostuvieron a sangre y bala las trincheras y posiciones revolucionarias enfrentándose al Ejército. Un día después, estalla la insurrección popular y se vence a la rosca minero-feudal y a su ejército, ya fraccionado y debilitado al extremo.

En los gobiernos nacionalistas y militares, que habían debutado como antiimperialistas y luego se sometieron a las directrices norteamericanas, se funda la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL) en febrero de 1967. Nace como sindicato de tropa policial y sus precursores recuerdan que fueron secuestrados por agentes de organismos de seguridad del presidente René Barrientos y luego de ser torturados, arrojados al agua en Río Abajo, pero tanto los fundadores como ANSSCLAPOL sobrevivieron.

En el golpe de estado del general Luis García Meza Tejada, el 17 de julio de 1980, el regimiento No. 1 de carabineros de la calle Colombia, en La Paz, se negó a obedecer las órdenes de los golpistas y se acuarteló.

En los últimos años muchas fueron las muestras del descontento dentro de la policía. Diversos motines en los regimientos pasaron inadvertidas para la población, como el de mediados de los años 90 del Grupo Especial de Seguridad (GES) que fue reprimido por los cadetes de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL).

El abril verde olivo

Sin embargo, la historia actual de las luchas sociales de la policía por reivindicaciones ligadas a los intereses obrero-populares y también sectoriales comienza en abril del 2000, casi de manera anecdótica.

En la ciudad de Santa Cruz un joven policía de tropa, Abad Hinojosa, inicia una huelga de hambre pidiendo el pago de tres meses de salario. Dice que necesita alimentar a su familia, pero nadie lo escucha y es reprimido. El rebelde no se rinde, viaja a la ciudad de La Paz y reinicia la huelga en la Catedral, reclamando ahora que el Estado pague los salarios adeudados a todo su batallón. Su acción es apoyada de inmediato por la Asociación Nacional de Esposas de Sargentos, Clases y Policías (Anessclapol), a la cabeza de Guadalupe Cárdenas, y posteriormente por la sargento Rosmery Vargas. La huelga crece al igual que las demandas: los amotinados exigen ahora un aumento salarial del 20 por ciento para toda la Policía Boliviana.

El país vive un clima de convulsión social y la huelga de hambre policial incomoda a muchos. Los sacerdotes desalojan a los huelguistas de la Catedral y el piquete de Abad Hinojosa se instala en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB). En el ayuno, los rebeldes siguen de cerca lo que pasa en el interior de Bolivia: en Cochabamba el pueblo se levanta contra la Ley de Privatización del Agua, la VII División de Ejército (con

asiento en la ciudad del Valle) utiliza francotiradores para frenar el alzamiento, pero la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) consolida su bloqueo de caminos a escala nacional, la Coordinadora del Agua asume el control de Cochabamba, el Bloque Sindical Antineoliberal se moviliza en el occidente del país y en Achacachi, en el altiplano paceño, los tanques están sembrando la muerte. La insurrección asoma en el horizonte.

La situación es insostenible y en la madrugada del sábado 8 de abril el general Hugo Banzer (ADN), presidente de la República, dicta el Estado de Sitio y ordena al GES la intervención del piquete de esposas y policías huelguistas, que estaba concitando creciente apoyo entre la población civil y los uniformados de la Policía. Banzer quiere eliminar ese foco de tensión, pero el GES se amotina y dice abiertamente que no reprimirá a sus camaradas ni a sus esposas.

A las 10:00 de la mañana del sábado, todas las unidades de la guarnición policial de La Paz (10.000 efectivos) están amotinadas. Al mediodía, marchan por la ciudad con destino al cuartel del GES compañías y pelotones policiales armados para reforzar a sus camaradas. A las 2 de la tarde hay más de 2.400 policías acuartelados dentro del GES. En la tarde del sábado, se une al motín el mayor de Policía David Vargas, quien junto con un teniente de esta misma fuerza, son los únicos oficiales que apoyan a la tropa amotinada.

El gobierno desespera. A medianoche del sábado 8, miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) atacan el GES, cruzan disparos con la policía por 10 minutos, pero no logran doblegarla. Un enfrentamiento mayor parece inevitable hasta que el gobierno retrocede y emite un mensaje por televisión: pide paz inmediata, decide retirar a las FFAA, deja sin efecto la Ley de Aguas, suspende el Estado de Sitio y ofrece a los amotinados un aumento salarial del 50 por ciento, en vez del 20 por ciento exigido inicialmente por la tropa.

En el cuartel del GES ya saben de la rendición gubernamental, pero muchos quieren más. La tropa amotinada discute con pasión si se acepta el aumento salarial o, si por el contrario, se toma por asalto el Palacio.

Finalmente se decide aceptar el aumento salarial y los rebeldes bajan las armas.

El domingo, las tropas policiales abandonan el cuartel del GES. Sobre ellos, llueven los aplausos de la población civil, reunida en los alrededores desde el sábado para apoyarlos.

Sin saberlo, civiles y uniformados de la Policía Boliviana están tejiendo la historia de febrero del 2003.

A lo largo de los años 2000 y 2001 hubo otras huelgas de hambre de efectivos policiales como la del cabo Adolfo Borora, o el épico motín del Batallón de Seguridad Física Privada (BSF-P) para que el Alto Mando policial y el gobierno reconozcan su derecho a la sindicalización y respeten el fuero sindical de sus dirigentes.

La revuelta de febrero

En febrero de 2003, un amotinamiento, ya cantado desde septiembre del año pasado, se inicia nuevamente en el GES. El descontento policial estalla el martes 11 ante el anuncio del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) de recortar el salario de trabajadores y empleados públicos y privados, a través de un impuestazo de entre 4 por ciento y 12,5 por ciento. Ese día, el GES se acuartela y demanda, en comunicación directa con los gobernantes, la anulación del impuestazo y un incremento salarial del 40 por ciento.

El motín policial es de dominio público recién el miércoles 12. A mediodía, estudiantes de secundaria del Colegio Ayacucho apedrean el Palacio de Gobierno, desprotegido por falta de policías. Los militares reprimen con violencia y se inicia la masacre de la Plaza Murillo. Fuerzas militares comienzan a disparar contra el pueblo movilizado y contra los cuadros policiales que se encuentran en el GES y los alrededores. Francotiradores de las FFAA disparan contra la población indefensa y también contra policías del GES causando gran cantidad de bajas (muertos y heridos). La Paz respira un ambiente de guerra civil. En los hospitales se llama a todo el personal médico y paramédico, se solicita donación voluntaria de sangre, se informa que no hay más camas ni capacidad para atender a tantos heridos.

La marcha convocada por la Central Obrera Departamental

mental (COD), de La Paz, se radicaliza, y se procede, junto a la población civil, al asalto y quema del Ministerio del Trabajo (símbolo del abuso y prepotencia oficial en favor de los empresarios), de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Desarrollo Sostenible, del Tribunal de Justicia Militar, del propio Congreso Nacional, la Alcaldía de la ciudad de El Alto, que queda reducida a cenizas, y luego comienzan los saqueos a tiendas comerciales e incluso a fábricas.

La lucha amenaza con generalizarse en toda la ciudad y desde el interior de la República las guarniciones policiales se suman íntegras al motín. En La Paz, trabajadores, desempleados, jóvenes de clase media y policías trabajan codo a codo desarmando el poder establecido. Desesperado y con la voz quebrada, el presidente Sánchez de Lozada emite un mensaje televisivo haciendo un llamado a la paz y retira el “impuestazo”.

Pero la lucha continúa entre militares y policías. Incluso después del mensaje presidencial, el pueblo continúa atacando propiedades públicas y privadas. Los franco-tiradores del Ejército siguen con su cosecha macabra y suena como cruel ironía que la sede de gobierno siga ostentando el nombre de La Paz. Al día siguiente, jueves 13, marchas convocadas por sectores de trabajadores y el pueblo en general continúan con el levantamiento popular. La multitud, que copa las principales ciudades del país clama, por la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y del vicepresidente Carlos Mesa.

Las sombras de la noche calman la sed de sangre y de venganza. El viernes 14, una procesión de miles acompaña a los 10 policías caídos. “Guardia fiel, qué te importa la vida si alumbrando te mata el deber”, dicen los compañeros de los acribillados. La trompeta anuncia el minuto de silencio y un teniente del GES no puede reprimir las lágrimas: “A mi camarada siempre lo voy a recordar como a un héroe”.

“Estos son los policías del pueblo”, remata una señora, que carga un niño en brazos y una infinita pena que se descarga en un hilito de sal y amargura por los sucesos del 12 y 13 de febrero.

FOTORREPORTAJE: DOS DÍAS DE FURIA



Foto: Sergio Landaeta

A picotazos, un escolar descarga su bronca en una ventana de Palacio

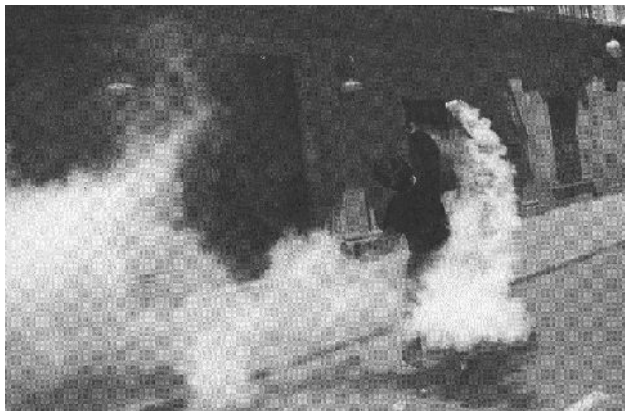


Foto: Sergio Landaeta

Un estudiante del colegio Ayacucho arremete contra el Palacio de Gobierno



Foto: Jorge Landaeta

Un grupo de soldados traslada pertrechos bélicos, en el preámbulo del enfrentamiento que tuvo un trágico saldo de 33 muertos a bala



Foto: Jorge Landaeta

Los policías de varias unidades de La Paz defendieron las instalaciones del GES con gases lacrimógenos. Los militares respondieron con balas

La guadaña de la muerte se enseñó también contra el pueblo. Un trabajador fue alcanzado mortalmente por una bala



Foto: Sergio Landaeta

10 policías murieron en la masacre de la Plaza Murillo. Decenas de civiles también fueron blancos humanos de los francotiradores



Foto: Sergio Landaeta

Un efectivo de las fuerzas del orden, vestido de civil, cuida la retaguardia de sus camaradas



Foto: Sergio Landaeta

Foto: Sergio Landaeta



El odiado Ministerio de Trabajo fue saqueado e incendiado, al igual que otras reparticiones gubernamentales

El Ministerio de Desarrollo Sostenible tampoco se salvó de la furia de los manifestantes.

Foto: Sergio Landaeta



EL POLICÍA REBELDE QUE DERROTÓ AL IMPUESTAZO DEL FMI

Los policías de base ganan, en promedio, 1 boliviano con 10 centavos por hora. El “impuestazo” confiscaba parte de los sueldos de los oficiales, con cinco años de estudio. Así, el malestar de los jefes policiales se combinó con la bronca de la tropa y concluyó en el enfrentamiento con los militares.

Miguel Pinto Parabá

(Econoticiasbolivia.com)

En Bolivia, muchos han comenzado a ver al líder de los policías rebeldes como un émulo de Hugo Chávez. El mayor David Vargas, responsable del idilio entre la policía y el pueblo, después de los sucesos del 12 y 13 de febrero, dice tener el honor de haber derrotado al Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque reconoce que fue de manera involuntaria. Ahora, y junto a los uniformados amotinados considerados un “factor de poder”, advierte que el país volverá a arder si el gobierno y las transnacionales insisten en la venta de gas por puertos chilenos.

En abril del año 2000, la Policía se “amotinó” y desactivó un Estado de Sitio. Tres años después, apoyados por el levantamiento popular del 12 y 13 de febrero,

derrotaron el “impuestazo”. Este acto les costó la vida a 10 carabineros, 4 militares y 19 civiles. Ahora, los policías, envalentonados, aseguran “no tener miedo” a derramar nuevamente su sangre en defensa de la democracia y de la soberanía nacional.

En el último motín policial hubo tres tendencias: una, la “radical”, apuntalada por la “tropa” policial que se opuso al impuesto al salario y exigió un incremento de sueldos del 40 por ciento; otra, la “mediadora”, conformada por oficiales de alta graduación, y la “orgánica” dirigida por la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL).

En el centro de operaciones —el cuartel del Grupo Especial de Seguridad (GES), que se está a media cuadra del Palacio de Gobierno, donde fueron acribillados los diez policías— se impuso la segunda corriente, la de los oficiales de alta graduación, que pusieron como “Comandante en Jefe” de los subordinados al Mayor David Vargas, quien también lideró el “motín” policial en abril del año 2000.

Ahora la popularidad de Vargas, de 41 años de edad, creció. Algunos sindicalistas lo comparan incluso con el coronel venezolano Hugo Chávez y el militar ecuatoriano Lucio Gutiérrez. Otros dicen que esto es una exageración. El gobierno lo tiene “fichado”. Pero, lo cierto es que goza del apoyo de gran parte de su institución y el respaldo de amplios sectores de la población. A las pocas horas de haber terminado el conflicto, se

realizó esta entrevista con el policía rebelde que puso en jaque a los dos últimos gobiernos.

El mayor, un hombre de voz serena y palabras medidas, no anduvo con tapujos cuando evaluó a los grandes personajes que hacen noticia en el mundo: calificó a George Bush, Osama Bin Laden, Sadam Husein y a quienes dirigen el FMI como unos “pendejos... hijos de su madre...”; al Papa Juan Pablo II como un hombre “controvertido”; a Lula, un “trabajador exitoso”; al presidente Hugo Chávez, un “combatiente”, y a Fidel Castro como “un gran luchador y combatiente social”.

Los hechos

La Policía se sublevó a las 2 de la tarde del 11 de febrero. El mayor Vargas —también egresado de la carrera de Psicología— relató que se hizo cargo del motín del GES recién a las cuatro de la tarde, a pedido de sus camaradas.

Los amotinados exigían una reunión con el Ministro de Gobierno, pero éste recién se presentó al día siguiente a las siete de la mañana.

El ministro de Gobierno, Alberto Gasser, fue concreto en esa rápida reunión. Dijo que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a dialogar, pero no bajo presión. Y que el “impuestazo” era “innegociable”. “Esta actitud de soberbia enfureció a mis camaradas, quienes decidieron continuar con su lucha.”

Aclaró que ellos, desde ese momento, hicieron tratativas con autoridades del gobierno para evitar el conflicto, pero nadie les atendió. Y la sangre llegó al río.

El tema se complicó cuando los estudiantes de secundaria del Colegio Ayacucho marcharon en plena Plaza Murillo y apedrearon el Palacio de Gobierno a las 11,30 de la mañana del 12 de febrero. A la media hora, llegó la Guardia Presidencial (el Regimiento Militar “Colorados de Bolivia”) y, armados hasta los dientes, rodearon el Palacio de Gobierno. Luego de tres escaramuzas con gases lacrimógenos, a las tres de la tarde finalmente se enfrentaron a los amotinados con balas de guerra, con un saldo de 10 policías y 4 militares muertos y varios heridos.

Causas estructurales

Las causas del motín policial, según Vargas, son “estructurales”. “Los periodistas tienen que entender que los policías de base ganan, en promedio, 1 boliviano con 10 centavos (menos de 15 centavos de dólar) por hora. Imagínense la calidad de vida que tienen nuestros efectivos. Este es el detonante central que hizo estallar el levantamiento policial”.

Además, con el “impuestazo” los oficiales, con 5 años de estudio, también estaban siendo afectados con un recorte de sus ya bajos sueldos. Este malestar se “combinó” con la “bronca” de la tropa policial y concluyó en

el enfrentamiento con los militares, explicó.

Lo que sucede, en opinión de Vargas, es que el gobierno intentó aplicar “verticalmente” una política económica digitada desde el FMI.

“Los bolivianos no somos los culpables del alto déficit fiscal que tiene el país. Los únicos culpables son los que nos gobiernan. Los ministros y los parlamentarios que, según la prensa, reciben otros sueldos de ‘gastos reservados’ son los que también se llevan gran parte del dinero del Estado. Otra cosa muy grave es que las empresas capitalizadas (bajo el control de empresas transnacionales) no pagan impuestos y se están aprovechando de nuestras riquezas. Esto hay que parar. Por eso, nosotros nos oponemos a la venta del gas a Estados Unidos por puerto chileno.”

Con un metro y sesenta y pico centímetros de altura, pero con la talla de líder, el jefe de los policías rebeldes no tiene dudas que América Latina es un continente “sometido” por los norteamericanos. Afirmó que Bolivia es un “mendigo sentado en una silla de oro.” “Contamos con riquezas que ni los países europeos tienen. Sinceramente, no entiendo cómo aún somos un país considerado pobre. Esto debe cambiar, para que nuestros hijos tengan un lugar donde vivir humanamente.”

“Las cinco prioridades sociales que los bolivianos deben solucionar de forma “urgente” son la pobreza, la salud, la educación, el desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana. Si no se da solución a estos temas, el

país, inevitablemente, arderá.”

Industrializar la coca

Sobre el espinoso tema de la erradicación de la hoja de coca, el Mayor también tiene un discurso radical: como parte de una estrategia de desarrollo sostenible, se la debe “industrializar”. Y aunque está de acuerdo con la propuesta del gobierno de censar el consumo de coca, no apoya que sólo sea para el ‘acullico’ (masticación), sino también para su industrialización.

Está convencido de la lucha contra el narcotráfico, sin embargo dijo que la que se está librando “es una lucha hipócrita” impulsada por algunos políticos que estuvieron comprometidos con regímenes que “incentivaron la producción de cocaína”. Cuando se le pidió nombres, afirmó vehementemente: “¡Ustedes los periodistas saben de quiénes estamos hablando!”

Durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta hubo un auge de la producción de cocaína en Bolivia, incentivada o por lo menos tolerada desde las esferas del poder.

Militante de la democracia

En el pico de la popularidad, confiesa que desde el 13 de febrero le “llovieron” las propuestas para integrarse a partidos políticos que desean lanzarse o relanzarse

con éxito a la arena política. Aseguró, sin embargo, que por respeto a su institución no militará en ninguno.

Vargas se considera un “militante acérrimo de la democracia”. Cree que, ante todo, la policía debe defenderla. “Si en este momento hubiera un golpe de Estado, sin temor a equivocarme, la Policía de forma monolítica se enfrentaría a los militares junto al pueblo boliviano para defender la democracia.”

“Lamentó mucho” que el gobierno se haya dado, en estos últimos días, a la tarea de dividir a la fuerza policial. “No lo van a conseguir. Ahora vivimos un idilio con el pueblo. Somos parte de las organizaciones sociales del país. Y tenemos el honor internacional de haber derrotado al FMI. Pero creo, en honor a la verdad, de forma involuntaria. Ahora, no les tenemos miedo. ¡Si quieren lucha, lucha van a tener!”

Insiste en que en el último levantamiento popular el Ejército perdió muchos espacios. “Han tirado por la borda 30 años de prestigio. Esto marcará las futuras luchas sociales. Yo espero de corazón que ya no haya más derramamiento de sangre. El gobierno ahora tiene que aprobar medidas económicas por consenso, sino tendrá oposición.” Y para Vargas los motines policiales han confirmado una certeza: “¡Aún existen pueblos dignos y soberanos...!”

HERMANO CONTRA HERMANO

No faltaron los héroes anónimos que intentaron evitar el enfrentamiento entre bolivianos, pero el raudo tren de la historia es incontenible. En las ciudades de La Paz y El Alto los iconos del poder económico y político fueron saqueados. La gente, espontáneamente, pidió “la cabeza del Goni”.

(Econoticiasbolivia.com)

Era la única silueta con falda que se distinguía en medio del humo de los gases y de los grupos de uniformados que cruzaban de un lado a otro de la Plaza de Armas, en la sede de gobierno. El primer plano de la cámara mostró la cara de una mujer adulta que abría los labios con mucho esfuerzo. Pero se dejó oír “que me maten”. Suplicaba que alguien le dispare. “No quiero vivir para ver que mis hijos se maten entre ellos”.

La desesperada señora, el miércoles 12 de febrero, tenía a un hijo en el grupo de militares que disparaban contra el grupo de policías rebeldes, en el que estaba su otro hijo.

A esas horas, algo más de las 3 de la tarde, a media cuadra de la Plaza Murillo, en la sede del Grupo de Seguridad Especial (GES) se lloraba a los policías muertos, y en plena plaza ya se había reportado la baja de un efectivo militar.

A las 4 de la tarde y con el reporte de diez personas muertas y más de setenta heridas, los civiles concentrados en los alrededores de la plaza principal, declarada zona militar, empezaron a instalar barricadas, quemaron vehículos y pese al mensaje presidencial de desistir de las nuevas políticas tributarias, pedían a gritos “la cabeza de Goni”.

Media hora después, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada salió a las pantallas de televisión por segunda vez, acompañado de los comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), del Ejército y de la Policía Nacional, para ordenar a sus efectivos el repliegue. Ya entonces empezaba a arder en llamas el Ministerio de Trabajo y los heridos de balas y balines que seguían cayendo en las calles eran trasladados por los ciudadanos civiles en frazadas del ejército, que ante la confusión, habían dejado desparramadas los efectivos militares, luego apostados en el Palacio de Gobierno.

A las 6 y mientras un reducido grupo de bomberos — porque el grueso se encontraba amotinado también en la sede del GES— intentaba controlar el fuego del Ministerio de Trabajo, grupos de civiles, que horas antes estaban por los alrededores con el objetivo común de protestar contra el gobierno, iniciaron otros incendios en la Vicepresidencia de la República, las sedes de los partidos de gobierno, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Unión Cívica Solidaria (UCS)

y las instalaciones de Burger King.

A las 10 de la noche también la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) empezó a arder y grupos de jóvenes salían de tiendas comerciales del centro paceño con calzados, comida y ropa.

En la ciudad de El Alto, la Alcaldía Municipal fue incendiada, los cajeros automáticos igualmente fueron asaltados y la empresa Aguas del Illimani saqueada, mientras en algunas esquinas grupos de personas se quitaban sillas y máquinas.

En los barrios residenciales de la zona sur, la furia de la gente de la zona norte apenas llegó por las ondas de televisión, aunque tres canales, uno estatal, ya habían cortado sus señales.

En la puerta del GES una madre esperaba comunicarse con su hijo, no sabía nada de impuestazos ni recortes salariales, solo quería que pare la masacre, que los humildes, vestidos de militares y policías, no se sigan masacrando.

EL PODER MEDIÁTICO EN BOLIVIA

El 13 de febrero, el periodismo televisivo se convirtió en el desaparecido cuarto poder o contra poder, con la capacidad de juzgar a los otros tres poderes formales. En ese momento, el gobierno de Sánchez de Lozada constató que no controlaba ni la realidad real ni la realidad mediática.

**(Andrés Gómez*,
especial para Econoticiasbolivia.com)**

¿Existe el Poder Mediático en Bolivia? Por supuesto, pero aún no está muy bien articulado ni sistematizado. Los primeros visos comenzaron a surgir en 1985 cuando se liberalizó el mercado de la comunicación. La aparición de la televisión privada fue clave. En la década del 90, la incursión de políticos-empresarios en el control directo de los medios (televisión, radios y periódicos) socavó y relativizó los poderes tradicionales, diferenciados por Montesquieu: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

* **Nota del Editor:** Este es un resumen de la exposición realizada por el periodista Andrés Gómez en el “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”.

La vigencia del modelo de libre mercado terminó de consolidar el Poder Económico por encima de los tres poderes tradicionales. Y de forma automática apareció en el escenario político del país otro poder: el Mediático. Vale decir que la ecuación del control del Estado había cambiado: Formalmente se necesitaba un partido político para participar en las elecciones, pero para ganarlas y durar en el gobierno era indispensable tener el Poder Mediático, consecuencia del Poder Económico. El liberalismo económico se sustentó durante 17 años sobre la base de la propaganda, como la dictadura acudió a ella durante 30 años. Se produce esta situación cuando la realidad real vence el espacio de la política. Entonces ésta para seguir ejerciendo poder necesita crear otra realidad a través de los medios. En definitiva, la función del poder mediático es falsear los hechos en nombre del bien común y evitar que la realidad del país empuje a la gente a pretender cambiar sus condiciones de vida.

Las jornadas del 12 y 13 de febrero significaron para los media, especialmente para la televisión, un hito en la historia del periodismo: pues, por primera vez, transmitía en directo una guerra civil. Fue para la televisión boliviana lo que para la televisión mundial la guerra del Golfo Pérsico y los hechos del 11 de septiembre. En un instante, el periodismo televisivo se convirtió en el desaparecido cuarto poder o contrapoder, con capacidad de crítica y de juzgar a los otros tres poderes formales.

En ese momento, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada constató que no controlaba ni la realidad real ni la realidad mediática. Ante ese panorama, tuvo que retomar el control de forma indirecta, lo que se pudo verificar en los noticieros centrales de la noche (la cadena de la Red Uno, ATB y PAT; Unitel fue el único canal que emitió su noticiero solo, pero desde Santa Cruz; Canal 4, RTP, denunció que fue obligado por el gobierno a cerrar sus emisiones), cuando, prácticamente, todos los presentadores convocaban a la paz social y defendían el orden establecido, en nombre de la democracia. Entonces, los media retornaron a su papel de ser el Cuarto del Poder.

Pero esos días demostraron al país que la propaganda no lo es todo, que no basta para detener la crisis económica que abate a la mayoría de los bolivianos y menos para camuflar la crisis moral que afecta a los políticos. Quedó sentado que el control del poder mediático no es suficiente para administrar el pensamiento crítico de la gente y menos para controlar sus necesidades vitales. Entonces, resurgió otro poder: El Popular. Aunque en esta ocasión sin una clara conducción política, es decir, sin el objetivo de tomar el poder político.

DEMOCRACIA NEOLIBERAL: SANGRE, VIOLENCIA E IMPUNIDAD

En Bolivia, hay una espiral ascendente de violencia estatal, que está directamente relacionada al ascenso de la protesta social. La criminalización de la huelga y la impune actuación de francotiradores son sólo dos ejemplos. Esta virulencia estatal está alimentando la violencia social.

(Econoticiasbolivia.com)

La democracia neoliberal boliviana ha practicado sistemáticamente la violencia estatal y una abierta impunidad para preservar los intereses económicos y políticos de los grupos de poder, denunció la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB).

Desde 1985, año que se instaura en el país el modelo de libre mercado, hubo 180 muertes en conflictos sociales, más de seis mil heridos y más de diez mil personas detenidas indebidamente, según el recuento del organismo defensor de los derechos humanos.

“No existe ningún detenido ni se ha sancionado a los culpables de la violación de los derechos humanos. La impunidad es una política de Estado, al igual que la violencia estatal”, aseguró el vocero de la APDHB, Sacha Llorenti.

En un balance de la situación de los derechos huma-

nos en Bolivia, Llorenti dijo que la reciente convulsión social, protagonizada por cocaleros, campesinos, policías, trabajadores y clases medias, en los primeros dos meses del 2003, han confirmado la existencia de políticas institucionalizadas contrarias a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Hay una espiral ascendente de violencia estatal, que está directamente relacionada al ascenso de las protestas sociales. Cuanto mayor es la movilización popular, mayor es la violencia estatal.”

Otra peligrosa manifestación de la intolerancia estatal es la “criminalización de la protesta social”, por la que los dirigentes y luchadores sociales son las principales víctimas de la represión, que ahora ya asume características de violencia extrema con la irrupción de francotiradores que eliminan a los revoltosos, aseguró la APDHB.

Francotiradores

“Los militares disparan contra la gente porque tienen la total seguridad de que no serán procesados. El ejército sale a matar y esa es la expresión más salvaje del Estado.”

La huella de los francotiradores está fresca en el recuento de la organización defensora de los derechos humanos. “En abril del 2000, en la Guerra del Agua, se comprobó la existencia de por lo menos un francotira-

dor del ejército (Róbinson Iriarte), quien inicialmente fue procesado y luego absuelto y promovido de grado en la institución militar. Lo propio ocurrió con las masacres de mineros en Capacirca, Amayapampa y La Huachaca, donde francotiradores del ejército acribillaron, con disparos de precisión, al dirigente minero Galo Luna y al profesor rural Rogelio Callisaya.”

En la revuelta cívico policial del 12 y 13 de febrero de 2003, la presencia de francotiradores, que acribillaron a varios de los 33 muertos en el alzamiento popular de La Paz, también fue documentada con videos y grabaciones presentadas en los canales de televisión.

“Ellos (los francotiradores) tienen la misión de bajar la moral de los revoltosos. Eliminan a los líderes y símbolos que consideran como enemigos. Por ello también dispararon contra el hombre de la bandera blanca (quién en medio del conflicto social de febrero fue herido de bala cuando convocaba a la pacificación en el centro de la ciudad de La Paz)”, explicó Llorenti, preocupado por las graves consecuencias que puede tener este accionar gubernamental.

Espiral de violencia

Y es que la violencia estatal y la total impunidad están generando una violencia “reactiva” de los más pobres. “Desde el 2000 se va generando una violencia reactiva, no legal, pero legítima. El movimiento popular boli-

viano se ha caracterizado por el uso de vías pacíficas para protestar (marchas, caminatas, huelgas de hambre, crucifixiones, etc.), pero ante la sistemática violencia estatal, están comenzando a responder con violencia.”

“En contraposición a lo que ocurría antes, en las jornadas de lucha del año 2000, murieron más efectivos militares que cocaleros”, explicó Llorenti, quien cree que “la violencia ya es parte de la polarización y de la fractura social. La reacción violenta de la gente, de la población civil, es cada vez más frecuente, y esto puede generar graves consecuencias para la sociedad y el futuro del país”.

Según la Asamblea, “una democracia, como la boliviana, que viola sistemáticamente los derechos, humanos, ya no es una democracia”.

BALAS CONTRA LA DEMOCRACIA

El recuento de la violencia estatal de la democracia neoliberal contra los movimientos sociales, tiene como principales hitos los siguientes hechos:

1) Gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989):

- Estado de sitio, represión y masivas detenciones.
- Masacre de Paratami.

2) Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993):

- Estado de sitio.
- Ejecución extrajudicial de cuatro personas.

3) Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997):

- Estado de sitio (seis meses).
- Tres decenas de muertos.
- Masacres de Eterazama, Caparcica y Amayapampa (En esa ocasión, como ahora, trata de aparecer como víctima y denuncia que grupos guerrilleros fueron los causantes de la violencia. Incluso da a conocer una lista de conspiradores).

4) Gobierno de Hugo Banzer Suárez (1997-2001):

- Violencia inusitada.
- Decenas de muertos en el Chapare, en la Guerra del Agua, y en Achacachi.

5) Gobierno de Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002):

- Treinta personas muertas.
- Asesinato del dirigente cocalero Casimiro Huanco, ejecutado por militares.

6) Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (agosto 2002-febrero 2003):

- Represión en el trópico de Cochabamba en enero del 2003 y en las calles de La Paz y en los caminos de Oruro, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba en febrero.
- 57 muertos, 600 heridos y más de dos mil personas detenidas indebidamente.

MAS: LA SOLUCIÓN VIENE DE ABAJO

¿Asamblea Popular o Asamblea Constituyente? ¿Existen diferencias entre estas dos organizaciones? Román Loayza planteó la organización de una Asamblea Constituyente. Sin embargo muchos sindicatos y movimientos sociales creen que este ofrecimiento es sólo un “remiendo democrático”.

(Econoticiasbolivia.com)

El Movimiento al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, tiene una certeza: la solución a la profunda crisis económica y social que vive Bolivia vendrá desde abajo.

“Hay la necesidad de lograr la unidad del campo y la ciudad. Todos hablan de revolución, pero la respuesta tiene que salir desde abajo”, aseguró el dirigente campesino del MAS, Román Loayza.

Durante el “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”, desarrollado en ciudad de La Paz, el 25 y 26 de febrero, y auspiciado por las centrales obreras departamentales y el Estado Mayor del Pueblo, dijo que el “neoliberalismo en Bolivia está moribundo y que hay que enterrarlo”.

“Si el Estado Mayor del Pueblo hubiese estado bien organizado, hubiésemos tomado el poder (en las jornadas del alzamiento cívico policial de febrero).”

“No hay que desanimarse, el momento de la toma del poder ya llegará”, dijo al explicar que el MAS propugna la construcción de una Asamblea Constituyente como eje del cambio de estructuras en el país.

MALLKU: TRABAJAMOS PARA HACER CAER AL GRINGO

Felipe Quispe, ex integrante del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), no terminó de convencer a varios de los asistentes al “Encuentro Nacional”. Planteó que el objetivo fundamental de la CSUTCB es la toma del poder político pero no a través de las elecciones. “¡Tiene que haber otra revolución!”

**(Econoticiasbolivia.com,
La Paz, marzo 5 de 2003)**

“Esta es una guerra a muerte. Estamos trabajando y organizando a las bases para sacar a Goni del gobierno”, aseguró el “Mallku” Felipe Quispe, el máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Radical en el discurso, Quispe explicó en el “Encuentro Nacional” que el movimiento campesino, especialmente el de occidente, no participó activamente en esas jornadas por estar en proceso de organización.

“En algunos sectores del agro estamos aún en tiempo de cosecha, los compañeros están metidos en sus cultivos, pero en dos o tres meses estaremos listos para actuar”, dijo al responder a los cuestionamientos de dirigentes obreros y cocaleros que ven un abismo entre sus ardientes proclamas de rebeldía y su accionar tibio

y muy cercano al colaboracionismo con el gobierno neoliberal.

“Tienen que entender que para bloquear caminos es necesario tiempo y organización. Hay que caminar semanas para organizar el bloqueo. No nos movemos rápidamente en el campo, no es como en la ciudad, y además es necesario aprender a valorar y conocer a nuestros enemigos. Estamos viendo cómo está el gringo (Gonzalo Sánchez de Lozada).”

Sin embargo, la explicación del Mallku, un ex militante del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) en los años 90, no terminó de convencer a varios de los asistentes al “Encuentro Nacional”, organizado por la Central Obrera Departamental (COB), de La Paz.

“Estamos en etapa de preparación ideológica y organizativa. Nuestro objetivo es la toma del poder político, pero no a través de las elecciones. Es un absurdo ir por el camino de la democracia, tiene que haber otra revolución; ese el pensamiento de la CSUTCB”, dijo, al reivindicar la vía armada.

Curtido por su paso por la cárcel, en la que estuvo por su actividad guerrillera, Quispe, que es además un acucioso estudioso de la historia boliviana y autor de varios libros sobre indigenismo y lucha armada, encuentra en el pasado las raíces de su propuesta.

“Los españoles nos han liquidado y sometido con la pólvora y la biblia. Simón Bolívar libertó a los países andinos con las armas. En 1952, se hizo la revolución

nacional con la insurrección armada y ahora nos espera lo mismo. Eso estamos preparando, eso estamos organizando, para eso estamos trabajando. Ya llegará el momento de la cosecha.”

¿GOLPE DE ESTADO O SALIDA POPULAR?

La victoria popular contra el “impuestazo” y el gobierno fue alcanzada, pero sin un claro referente político sindical. Las organizaciones sociales están fragmentadas. Falta un programa político que sustituya al neoliberal. La clave para avanzar es que la población recupere la confianza en sí misma.

(Econoticiasbolivia.com)

Si los trabajadores y el movimiento popular no logran fortalecerse ni avanzar en lo programático y organizativo, en Bolivia se dará una salida autoritaria, a través de un golpe militar y la eliminación selectiva de dirigentes sindicales, pronosticó el representante del antineoliberal Estado Mayor del Pueblo, Oscar Olivera.

“Bolivia vive una profunda crisis estatal. Se ha roto la base política del sistema democrático, el Estado perdió toda legitimidad y el poder está fragmentado”, dijo el dirigente fabril y conductor de la denominada “Guerra del Agua”, desatada en abril del 2000 en la ciudad de Cochabamba y que estuvo a un paso de derribar al entonces presidente y exdictador Hugo Banzer (ADN).

Al evaluar el alzamiento cívico policial del 12 y 13 de febrero del 2003, junto a más de doscientos delegados obreros, campesinos y sectores radicalizados de la clase media urbana. Olivera explicó que la crisis estatal

que vive Bolivia no se mantendrá por mucho tiempo. “Hay dos salidas: una autoritaria y otra pacífica y democrática. La primera, la autoritaria, está avanzando aceleradamente. La derecha está construyendo sus escenarios para salvar sus privilegios. Están trabajando para el golpe de Estado y la eliminación selectiva de los dirigentes sociales.”

“La segunda salida es pacífica y democrática. El Estado Mayor del Pueblo (que aglutina, bajo la dirección del líder cocalero Evo Morales y algunas centrales obreras departamentales, a cocaleros, campesinos, obreros, estudiantes y sectores de clase media) debe luchar por una auténtica democracia. Debemos agotar todos los medios pacíficos y demostrar eso al pueblo, para que una vez que tengamos que usar la violencia, esa sea legítima.”

Según Olivera, esas dos tendencias están en pugna porque buscan dar una salida a la conflictiva situación generada por la convulsión social y la extrema violencia, desatadas a principios de año.

La crisis

En enero, la política gubernamental de erradicación de cocales, impulsada bajo la directa presión de Estados Unidos, chocó con violencia con la resistencia de campesinos e indígenas productores de la hoja. En el trópico cochabambino florecieron las balas y la muerte: 22

mil efectivos de las fuerzas combinadas de la policía y el Ejército no pudieron doblegar a los coccaleros, aunque dejaron un saldo de 13 muertos, 60 heridos y cerca de 200 detenidos ilegalmente.

Ante la imposibilidad de seguir ejerciendo la violencia estatal, el gobierno accedió al diálogo sobre el tema de la coca y otros temas fundamentales como la exportación del gas natural, la dotación de tierras, la integración al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA, extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluía a Estados Unidos, México y Canadá), medidas económicas y presupuesto nacional. Siete mesas de diálogo tratan estos temas, aunque sin resultados positivos.

En febrero, la intención gubernamental de imponer el “impuestazo” (un impuesto sobre el salario de trabajadores y empleados del sector público y privado) desencadenó un alzamiento popular, que puso en jaque al gobierno. La policía, uno de los brazos armados del Estado, que casi siempre sirvió para doblegar la resistencia popular, se dio la vuelta y puso patas arriba la gobernabilidad. El presidente de la República, pese a anular el impopular impuesto al salario, no tuvo más opción que utilizar al Ejército para controlar, a punta de bala y metralla, a los amotinados y preservar su permanencia en el poder.

“Se ha puesto fin al monopolio que tenía la clase política para tomar decisiones. La muchedumbre, la multitud

ha destruido, en las jornadas del 12 y 13 de febrero, los símbolos del poder político. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se mantiene en el cargo apoyado sólo por las bayonetas del Ejército”, explicó Olivera.

Debilidades y retos

La victoria popular sobre el “impuestazo” y el gobierno fue alcanzada, sin embargo, sin un claro referente político sindical. “En La Paz no hubo una organización social o popular capaz de convocar a la población. Fue una acción espontánea”, dice el sindicalista al extraer las lecciones que deja el alzamiento popular de febrero. Entre otras debilidades del movimiento antineoliberal están, según Olivera, la falta de unidad entre las organizaciones laborales y sociales. “Seguimos fragmentados, nos falta un verdadero y efectivo Estado Mayor del Pueblo y nos falta un programa que sustituya al neoliberal.”

“Debemos elaborar un discurso inclusivo, que incluya a todos los sectores populares. Un discurso que sea creíble para la gente. Debemos construir un nuevo Estado, donde el pueblo y los excluidos sean los que decidan.”

“La clave para avanzar en esta coyuntura es que la población recupere la confianza en sí misma y para ello debemos devolver la capacidad de debatir, analizar y decidir a las bases”, agregó.

LOS CINCO DESAFÍOS DEL MOVIMIENTO ANTINEOLIBERAL

La solución a la crisis que vive Bolivia se trasladó al escenario de los obreros. Los trabajadores están obligados a dar una respuesta política, orientada no sólo a liquidar el actual modelo, sino fundamentalmente a transformar de raíz la estructura económica y social del país.

(Econoticiasbolivia.com)

El movimiento obrero y popular tiene que resolver cinco grandes e ineludibles retos si pretende sepultar al neoliberalismo y abrir una senda de progreso y bienestar para los bolivianos, sentenció el ex secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Edgar Ramírez.

Las tareas urgentes son: superar los grandes problemas organizativos, estructurar un programa y proyecto de poder, definir quiénes son los actores fundamentales del proceso revolucionario, establecer nexos y vinculación con los nuevos actores sociales y delinear las vías y mecanismos para la toma del poder.

Según el veterano dirigente laboral, la profunda crisis estatal que vive Bolivia obliga a los trabajadores a dar una respuesta política, orientada no sólo a liquidar el

actual modelo económico sino fundamentalmente a transformar de raíz la estructura política, económica y social del país.

“Se está derrumbando el poder económico y social de la burguesía, pero aún no hay una contraparte del poder popular”, dijo durante su participación en el “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”.

“Primero tenemos que resolver el problema de organización. Tenemos que tener una organización capaz de elaborar propuestas y de ejecutar sus planteamientos”, aseguró Ramírez, convencido de que todos los trabajadores y sindicalistas debieran trabajar para lograr la unidad en torno a una Central Obrera dirigida por los sectores revolucionarios y no por representantes ligados al modelo neoliberal y a los gobernantes de turno. Otra tarea ineludible e inmediata es la elaboración de un programa de poder. “Necesitamos un programa. Necesitamos definir qué hacer con nuestro gas, qué hacer con la minería y la industria, qué hacer para lograr el desarrollo del país, qué hacer en el tema salarial y con las transnacionales.”

Según Ramírez, el movimiento antineoliberal también debe identificar claramente a los actores sociales capaces de luchar y ejecutar el programa de los trabajadores. “Debemos definir quiénes llevarán adelante nuestro programa: ¿serán los candidatos?, ¿serán los políticos del Parlamento?, o ¿seremos los propios trabajadores

del campo y las ciudades? Eso debe quedar muy claro.” El cuarto desafío es incorporar a nuevos sectores en la lucha social (policías, desocupados, jóvenes y mujeres). “Tenemos que trabajar en fortalecer nuestras organizaciones desde las bases. Las bases tienen que conocer y discutir todo, tienen que decidir todo, porque sin ellas no hay respuesta organizada de la población.” Definido el programa político y fortalecida la organización de los trabajadores del campo y las ciudades, el movimiento antineoliberal también debe resolver cómo tomar el poder. “Los trabajadores tenemos que ver cómo sacamos del poder a los gobernantes: ¿será a través del voto o será con la insurrección armada? Eso debe quedar también muy claro para todos”, agregó el sindicalista.

LECCIONES DEL LEVANTAMIENTO POPULAR BOLIVIANO Y RESOLUCIONES DEL ENCUENTRO

El agotamiento del modelo neoliberal-capitalista es la causa fundamental del espontáneo alzamiento del 12 y 13 de febrero. El “Encuentro Nacional” fijó como tareas inmediatas el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada y la construcción de un sistema económico y social alternativo al libre mercado.

(Econoticiasbolivia.com)

Las organizaciones sindicales y sociales que participaron del “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”, que se realizó en la ciudad de La Paz el 25 y 26 de febrero, resolvieron iniciar un conjunto de tareas para recuperar la otrora poderosa Central Obrera Boliviana (COB) de “manos del gobierno” y asumir la responsabilidad histórica de construir un “Estado de los trabajadores del campo y las ciudades”.

En la reunión participaron varias centrales obreras departamentales, sindicatos, federaciones y confederaciones de todo el país, los gremios que pertenecen al Bloque Sindical Antineoliberal —de línea opositora a la dirección oficialista de la COB y al Poder Ejecutivo— y el Estado Mayor del Pueblo —una organización

también contraria al régimen y fuertemente influenciada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del cocalero Evo Morales—.

Al Encuentro Nacional también asistieron, como “invitados especiales”, representantes de instituciones, dirigentes de movimientos sociales y profesionales comprometidos con los intereses de los trabajadores, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el dirigente de los campesinos del país, Felipe Quispe, el ex secretario Ejecutivo de la COB, Edgar Ramírez, los economistas Pablo Ramos y Carlos Arce, el periodista Andrés Gómez, el asesor legal de varias instituciones gremiales y sociales, Gonzalo Trigoso, y el líder de los policías que se amotinaron el 12 y 13 de febrero, el Mayor David Vargas.

Las organizaciones reunidas el 25 y 26 de febrero coincidieron en varios puntos de los que se destacan: 1) el último levantamiento popular fue “espontáneo” y no tuvo una dirección política ni sindical; 2) este último movimiento social, que costó la vida a 33 personas, fue producto del “agotamiento” del modelo neoliberal; 3) falta, en Bolivia, una “estrategia de poder” de los trabajadores, “alternativo” al sistema “neoliberal-capitalista”, que es “urgente” construir, y 4) esta estrategia de toma del poder por parte de los trabajadores del campo y las ciudades debe pasar por “derribar el Estado dirigido por las transnacionales y la embajada norteamericana”.

Por la riqueza y complejidad de los planteamientos, transcribimos textualmente sus dos resoluciones. Primero, el documento “¡No a la venta del Gas y recuperemos la COB de manos del oficialismo!” “ y, segundo, la “Tesis de La Paz:¡ Derroquemos el Estado de las transnacionales y construyamos el Estado de los trabajadores del campo y las ciudades!”.

No a la venta del gas y recuperamos la COB de manos del oficialismo

1. Ratificamos el estado de emergencia de todos los sectores, trabajadores, campesinos, clase media empobrecida, y todos los explotados del país, ante la velada intención de venta del gas. Si el gobierno vende el gas, el pueblo boliviano debe responder con huelga general indefinida, bloqueo de caminos a nivel nacional, movilización permanente y una radical desobediencia civil. Convocamos también a los policías, militares patriotas y tropa a defender la soberanía nacional que está en peligro.

2. Este Encuentro define que no es una confrontación de ideologías, sino es un Encuentro de organizaciones que están en la pelea contra el modelo neoliberal y sus sirvientes, quienes aplican sumisamente los mandatos del FMI, BM, las transnacionales y el gobierno del Norte.

3. Las organizaciones sindicales y sociales del país de-

finen fortalecer el Estado Mayor del Pueblo, mientras la supuesta dirección de la COB se encuentra en manos del gobierno. Nos ratificamos en el desconocimiento del supuesto comité ejecutivo de la COB dirigido por Saturnino Mallku. Deben ser la CODs (Centrales Obreras Departamentales) las que a la brevedad posible convoquen a un Congreso Ordinario de la COB*, para superar su crisis y recuperar la institución para los trabajadores, campesinos y los explotados del país.

4. Por la lucha consecuente, hasta conseguir el respeto de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional, tierra y territorio, y justicia social.

5. Convocamos a todos los sectores a la unidad hasta derrotar el modelo neoliberal expulsando a las transnacionales y sus sirvientes criollos.

Tesis de La Paz: Derroquemos al Estado de las transnacionales y construyamos el Estado de los trabajadores del campo y las ciudades

El Encuentro Social Nacional que se realizó en La Paz, entre el 25 y 26 de febrero, sacó varias lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero y, sobre la base de este análisis, “resolvió una serie de medidas que deber ser enriquecidas desde y con las bases de todos los sectores trabajadores del país”.

1. Derrotar definitivamente el modelo neoliberal capitalista e instaurar un modelo económico, social y po-

lítico dirigido y planificado por los trabajadores del campo y las ciudades.

2. Luchar por la reversión al Estado de las riquezas naturales y de todas las empresas privatizadas y transnacionalizadas de forma corrupta.

3. Ratificando que la tierra es de quien la trabaja, expropiar la tierra de los terratenientes y empresas transnacionales a favor de los originarios para conformar centros agrícolas colectivos e industrializados.

4. Planteamos la autodeterminación de las naciones oprimidas y la entrega de la tierra y territorio a esos importantes sectores sociales.

5. Ante la incapacidad del gobierno y por haber enlutado al país, los trabajadores organizados, centrales obreras departamentales y el Estado Mayor del Pueblo, convocamos al pueblo a luchar por la toma del poder.

6. Derrotar y expulsar del estado boliviano a las transnacionales, al Banco Mundial (BM), al Fondo Monetario Internacional (FMI).

7. Desconocer el pago de la deuda externa, porque fue hecha de forma ilegal e ilegítima.

8. Convocar a la tropa y jóvenes oficiales de la policía a luchar, como lo hicieron el 12 y 13 de febrero, junto a los trabajadores del agro y las ciudades para instaurar una sociedad sin explotados ni explotadores.

9. Convocar a nuestros hijos y hermanos de la tropa militar, a los sargentos, clases, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas a dar vuelta las armas y ayudarnos

a expulsar del país al gobierno de las transnacionales y la embajada norteamericana.

10. Organizar en nuestros propios sindicatos, comunidades y organizaciones sociales, medios de comunicación alternativos para combatir la política distorsionadora de los grandes medios de prensa comerciales. Sugerimos respaldar económicamente a nuestros medios de comunicación que aún están en funcionamiento. Como estrategia de poder, planteamos la democratización y el control social de todos los medios de comunicación comerciales.

11. Reemplazar el poder judicial con tribunales populares, reemplazar el poder legislativo con la ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS, y reemplazar el poder ejecutivo con un gobierno de los trabajadores del país.

12. Poner en manos del nuevo Estado las riquezas y propiedades de los empresarios privados, terratenientes, banqueros y grandes exportadores. Planteamos el manejo social, planificado y colectivo de todo el aparato productivo boliviano.

13. Derrocar al gobierno de las transnacionales, para instaurar un gobierno de los trabajadores.

14. Rechazar la venta del gas a Estados Unidos. Revertir a la propiedad y el dominio del Estado los hidrocarburos. Poner como parte de la estrategia del gobierno de los explotados la industrialización y el desarrollo del país sobre la base del gas y en beneficio de los bolivia-

nos. Si el gobierno vende, unilateralmente, nuestro gas, el pueblo boliviano inmediatamente responderá con la huelga general indefinida, con bloqueo de caminos a nivel nacional, movilización permanente y una radical desobediencia civil. Alertamos que tampoco permitiremos la enajenación del Mutún.

15. Darnos a la tarea, en consulta a los trabajadores de base y en consonancia con este documento, de construir un programa y estrategia de poder para lograr una sociedad horizontal, justa y humana.

16. Reiterar que con una papeleta multicolor y multicolor los trabajadores sólo podemos llegar al gobierno pero no al poder.

17. Adoptar como método de lucha para tomar el poder, los métodos colectivos de acción directa que se dieron en abril y septiembre del 2000 y el 12 y 13 de febrero del 2003. Sugerimos construir en los sindicatos y organizaciones sociales Comités de Autodefensa revolucionarios.

18. Derrocar al supuesto Comité Ejecutivo de la COB, copado por oficialista y corruptos, y convocar, inmediatamente, a un Congreso Ordinario para potencia nuestra institución matriz bajo principios revolucionarios. Que las CODs y las Organizaciones vivas dirijan el Congreso.

19. Aclarar que los dirigentes sindicales y sociales que participamos de los movimientos sociales, no somos ni “narcotraficantes”, “vándalos”, “extremistas”, ni “te-

roristas”, sino REVOLUCIONARIOS.

20. Sobre la base de los anteriores puntos, generar desde las bases la unidad de los trabajadores e ingresar en el próximo conflicto con el gobierno en una misma fecha. Resolvemos, además, adoptar como plataforma mínima de lucha el documento de 11 puntos de la Central Obrera Departamental (COD), aprobado en su último ampliado.

TROTSKISTAS: ES HORA DEL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO*

La miseria extrema en que se encuentra la gran mayoría de los bolivianos alcanza a la tropa y la oficialidad de bajo rango, tanto de la Policía como del Ejército. La clase dominante ya no es capaz de alimentar ni siquiera a quienes deben cuidarle las espaldas. Por lo tanto hay que derribar al Estado burgués.

(Econoticiasbolivia.com)

El trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR), de Guillermo Lora, cree que Bolivia ya está madura para la revolución y la dictadura del proletariado.

Al evaluar el alzamiento popular de febrero, el POR destaca la quiebra del aparato represivo del Estado y la posibilidad de resolver por esa vía el problema del armamento de las masas.

Los trotskistas están seguros que el movimiento obrero y popular camina aceleradamente hacia la insurrección

* **Nota del Coordinador:** Aclaremos que, por decisión propia, ningún militante del POR participó en el “Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero”. Empero, respetando la pluralidad ideológica con la que fue realizada esta publicación, se decidió introducir íntegramente esta nota informativa que permite tener al lector otro balance de la eclosión social de febrero.

que daría fin con la propiedad privada de los medios de producción y con el propio Estado burgués.

El POR es, organizativamente, un diminuto partido, pero con una enorme y decisiva influencia en la vida política y sindical boliviana desde los años 40. En esa década elaboró la Tesis de Pulacayo, adoptada como la Biblia por los mineros bolivianos, y en la que se proclama que la liberación nacional y social será posible únicamente con el gobierno de obreros y campesinos.

Bajo su influjo, a principios de los años 70, la Central Obrera Boliviana (COB) asumió, en sus documentos y tesis, la tarea histórica de la construcción del socialismo. En esa misma época, el POR y su líder Guillermo Lora fueron los artífices de la denominada “Asamblea Popular”, un verdadero soviet de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas, que fue destruido con el golpe militar de Hugo Banzer en 1971.

En la etapa neoliberal, los trotskistas mantuvieron su discurso contestatario, proclamando la necesidad de la revolución social. Para ellos, los acontecimientos del 12 y 13 de febrero no son una casualidad ni “un rayo en el cielo sereno”.

Econoticiasbolivia extrae esta evaluación de un ejemplar de Masas, el vocero oficial del POR.

Evaluación del POR

Masas (N° 1843 del 21 de diciembre del 2003), dice lo

siguiente: No es la primera vez (recordamos el amotinamiento del año 2000), ni será la última, en que la tropa policial se rebela demostrando que el descontento social tan profundo alcanza al propio aparato represivo del Estado burgués. La clase dominante ya no es capaz de alimentar ni siquiera a quienes deben cuidarle las espaldas. La miseria extrema en que se encuentra la gran mayoría de los bolivianos alcanza a la tropa y a la oficialidad de bajo rango, tanto de la Policía como del Ejército.

El gobierno, servil ante las instrucciones del FMI, quiso imponer su maldito impuestazo. No se imaginó que sería la policía quien desate la furia popular contra la medida. Apenas se supo del amotinamiento policial, la población se volcó a las calles a rodear la plaza (Murillo), esperanzada en que ésta podía ser la oportunidad para asaltar este bastión, símbolo del poder burgués.

El asedio no cedía pese a la brutal represión de los militares y sus francotiradores que, no cabe duda, obedecían órdenes del gobierno que buscaba ahogar en sangre la rebelión de la policía.

La furia popular contra el gobierno se ensañó con los símbolos del poder: Ministerios, Vicepresidencia, sedes de los partidos políticos de gobierno fueron arrasados por la gente insurrecta en las calles. La gente no fue a saquear estos edificios, no se llevaba nada, fue a destruirlos. Estaban expresando así, de manera fetichista, su deseo de acabar con el poder burgués.

Grandes lecciones

Los hechos de los días 12 y 13 de febrero están llenos de lecciones.

Primero. Nos muestra el camino para resolver el problema del armamento de las masas: La quiebra del propio aparato represivo del Estado burgués. Las armas están en manos de la policía y de las Fuerzas Armadas y es posible arrebatarlas de esas manos, ganando a la tropa y a la oficialidad a la causa revolucionaria.

Segundo. Es necesaria una dirección revolucionaria que conduzca la lucha de las masas a materializar la revolución destruyendo el poder burgués y no sólo algunos de sus símbolos. Destruir el poder burgués quiere decir echar del poder a la clase dominante en su conjunto para instaurar el gobierno de los explotados: el gobierno obrero-campesino que sepulte a las transnacionales y sus lacayos, la burguesía nativa, que nos explotan y saquean el país. No se trata de pedir la renuncia de Goni (el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada) para salvar el orden burgués y su falsa democracia, como planteó el reformista y ambicioso Evo Morales.

Se ha logrado hacer retroceder al gobierno con lo del impuestazo. Corresponde ahora exigir (como consignas de transición) que acabe la miseria extrema, superar la desocupación masiva con trabajos permanentes, salario mínimo vital de acuerdo al costo de la canasta

familiar, presupuesto suficiente para las universidades y para la salud pública, recuperar el gas y el petróleo de manos de las transnacionales.

Si el estado burgués es incapaz de atender estas demandas del pueblo hambriento, y si como ya lo ha manifestado no puede dar de comer a los bolivianos, no merece seguir existiendo y debe ser destruido. Debemos acabar con el orden social burgués imperante, con la gran propiedad privada burguesa e instaurar el gobierno de obreros y campesinos (la dictadura del proletariado).

CRISIS SINDICAL: DIRIGENTES DE LA COB QUEDAN AL DESCUBIERTO

Un hecho quedó claro después del 12 y 13 de febrero: los trabajadores de base quieren luchar, pero la burocracia sindical no se los permite. Muchas cúpulas gremiales están “infiltradas” por el gobierno. Sin embargo, desde abajo, varios sectores obreros han palpado la necesidad de dotarse de direcciones que estén a la altura de los acontecimientos.

Miguel Pinto Parabá

(Econoticiasbolivia.com)

La burocracia sindical boliviana no se salvó del terremoto social del 12 y 13 de febrero: la dirección pro gubernamental de la Central Obrera Boliviana (COB) quedó seriamente debilitada y con profundas fisuras. Ahora, el inmediato recambio de dirigentes y el “fortalecimiento orgánico” de esa máxima institución laboral es una “prioridad histórica”, según algunas Centrales Obreras Departamentales, federaciones y confederaciones.

Igual que el Bloque Sindical Antineoliberal —una agrupación de sindicatos opositores al gobierno y también a la cúpula de la COB— y el Estado Mayor del Pueblo —alianza gremial y social fuertemente influen-

ciada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales— la máxima organización de los trabajadores bolivianos tampoco estuvo a la altura de los convulsivos acontecimientos de febrero.

En esos acontecimientos, la “corriente progubernamental” infiltrada en el Comité Ejecutivo de la COB cumplió su rol colaboracionista. Pero, todo esto mostró en el fondo un hecho esencial: la abismal separación entre bases y dirigentes, que se inició desde 1985, año en que comenzó la aplicación del modelo neoliberal.

La gota que rebalsó el vaso

Por si todo esto fuera poco, el 25 de febrero de 2003 (doce días después del levantamiento popular), el máximo dirigente de la COB, Saturnino Mallku, fue descubierto por varios medios de comunicación festejando su cumpleaños con funcionarios del Ministerio de Trabajo y en dependencias de esta institución.

El edificio del Ministerio de Trabajo, junto a otros íconos del poder, fue apedreado, saqueado e incendiado por el pueblo, el 12 de febrero. Y el saldo final de esa rebelión social, que comenzó con un motín policial, fue de 33 muertos a bala y más de 200 heridos.

El festejo de Saturnino Mallku no mereció la expulsión, tal como exigieron varios sectores de obreros del país. Ni siquiera fue sancionado verbalmente. La razón de ello, es que gran parte del Comité Ejecutivo de la

COB estuvo en la fiesta de cumpleaños organizada por el ministro de Trabajo de entonces, Juan Subirana. Coyunturalmente, a Saturnino Mallku un grupo de dirigentes le aceptó un pedido de “licencia indefinida”, que, según sus propias declaraciones, “fue conversado y concertado con su familia”, ante la airada protesta de varias organizaciones gremiales intermedias que pedían “su cabeza”. Pero, este hecho recién se definió orgánicamente el martes 11 de marzo, en un Ampliado Nacional que se realizó en la ciudad minera de Oruro. Saturnino Mallku y su Comité Ejecutivo se agarraron con uñas y dientes de la dirección de la COB. Sin embargo, no pudieron evitar la mayoritaria decisión del Ampliado de convocar a un Congreso Ordinario, en el plazo ineludible de 60 días.

Separación de bases y dirigentes

Todos estos hechos, que para algunos dirigentes de la entidad sindical nacional son “anecdóticos”, tienen su explicación y relevancia histórica.

La COB fue creada a los pocos días de la rebelión boliviana del 9 de abril de 1952. El 17 de abril nació como un “órgano de poder”, firmemente ligada a los intereses de los envalentonados obreros, que llevaron a la victoria a la revolución.

Apoyada en sus “sindicatos armados”, la COB impulsó la nacionalización de las minas, la reforma agraria

y el voto universal. Hasta 1981 fue un actor político que luchó contra todos los regímenes dictatoriales y, en 1982, finalmente, fue un protagonista importante de la instauración de la democracia.

Pero, con la aplicación del modelo neoliberal, en 1985, y el posterior despido de más de 25 mil trabajadores mineros, la COB fue debilitada. Y, en 1989, con la caída del Muro de Berlín, su esencia socialista, en la práctica, fue revisada casi por todos sus dirigentes.

En este contexto, una “cúpula burocrática”, como dicen sus actuales opositores, se posesionó lentamente de la dirección de la COB. En 1995, en medio de un gran escándalo periodístico, se evidenció la presencia en sus filas de dirigentes que “cobraban sueldo del Ministerio de Trabajo”. El hecho quedó en el olvido.

Tres años después, en 1998, el ex Secretario Ejecutivo de la COB, Edgar Ramírez (de línea antineoliberal), tras denunciar actos de corrupción, también decidió abandonar el ente sindical nacional.

Después que algunos líderes de la burocracia sindical fueran “expulsados”, estas denuncias, se constituyeron en algo común.

A la hora de identificar la principal causa de la “corrupción” y “burocratización sindical” existe consenso en varios analistas y sindicalistas honestos: “la gran separación que existe entre dirigentes y bases está matando a la COB”.

“Los dirigentes han dejado de ser controlados por los

trabajadores, ya no van a las asambleas, no rinden cuentas y han perdido los objetivos estratégicos e históricos de los obreros, la instauración del socialismo, como rezan sus documentos de principios”, afirma una de las resoluciones del Seminario Nacional “Situación Política y Orgánica de la Central Obrera Boliviana (COB)”, que se realizó en diciembre de 2002, en La Paz.

El último Congreso neoliberal

Un último hecho orgánico-sindical que demostró la infiltración de “agentes del gobierno” en la dirección del ente matriz de los obreros fue lo que sucedió hace un año.

El 21 de marzo de 2002, mediante documentos públicos y conferencias de prensa realizadas en Sucre (sede del último Congreso cobista), la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Jubilados, la Confederación de Maestros Rurales, la Federación de Trabajadores de la Prensa, la Confederación de Maestros Urbanos y Rurales, la Confederación del Sistema de Seguridad Social, los Cocaleros, los Colonizadores, la Central Obrera Departamental (COD), de La Paz, la COD-Cochabamba, la COD-Santa Cruz, la COD-Potosí, la COD-Beni, COD-Sucre, la COR de El Alto, la COR-Uyuni, la Federación de Gremiales de La Paz, la Generación de Trabajadores Sin Jubilación y una

decena más de organizaciones departamentales y regionales, que le dan vida a la COB, determinaron “no participar” en el XXI Congreso Ordinario, con el argumento de que estaba “financiado y timoneado por los partidos neoliberales (MIR, ADN y MNR, partido del actual presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que en ese entonces estaba en la oposición)”.

Luego de que se nombrará “verticalmente” la nueva directiva de la COB, dos días después, las organizaciones que abandonaron el evento firmaron el documento “La COB cayó en manos del gobierno” (El Diario, 25-3-02), con seis graves denuncias:

1. De los 26 dirigentes (de la COB), 12 son militantes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR, ahora en el gobierno); 7, militantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN, socio del gobierno); 4, militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, ahora en el poder) y de 3 no se logró identificar su militancia partidaria.
2. De las 41 carteras que tiene la COB, 15 quedaron acéfalas por inasistencia o abandono.
3. El supuesto Comité Ejecutivo de la COB está integrada en un 90 por ciento por organizaciones que no tienen bases o no hacen vida activa y orgánica.
4. El autodenominado “bloque proletario (neoliberal)” quedó dividido. Los delegados de la minería estatal y los jubilados mineros abandonaron el Congreso. Los fabriles de La Paz también abandonaron el evento.

Paradójicamente, los petroleros, harineros, ferroviarios y constructores, que, en los últimos años, no organizaron ni una sola marcha de protesta o huelga, son los que les respaldan.

5. Las confederaciones, federaciones y CODEs (Centrales Obreras Departamentales) que hacen vida orgánica no tiene representación en la COB.

6. El XII Congreso de la COB sólo se desarrolló con el 20 por ciento de las organizaciones afiliadas.

Frente a ello, Saturnino Mallku afirmó “haber sido correctamente elegido”, aunque luego admitió que fue apoyado por “pocos sectores”.

“Si el Congreso no terminaba con la elección de un Comité Ejecutivo eso implícitamente definía el fin del ciclo de nuestra COB. Por eso nos pareció correcto asumir este tipo de posición”, agregó, en conferencia de prensa (El Diario, 25-3-02).

Perspectivas

Ante este crítico cuadro sindical boliviano, organizaciones afiliadas al ente matriz de los trabajadores se dividieron en tres grandes tendencias: 1) el Bloque Sindical Antineoliberal; 2) el Estado Mayor del Pueblo, y 3) el “supuesto” Comité Ejecutivo de la COB.

Las dos primeras tendencias han logrado realizar trabajos conjuntos para unificar a los distintos sectores. Por ejemplo, el sábado 16 de marzo, los dirigentes del

Bloque Sindical Antineoliberal y el Estado Mayor del Pueblo, en conjunto, ratificaron “el desconocimiento del supuesto Comité Ejecutivo de la COB dirigido por Saturnino Mallku”.

Concretamente, plantearon que las “Centrales Obreras Departamentales y las organizaciones más representativas del país dirijan el próximo Congreso Ordinario, para recuperar esta prestigiosa institución de manos del gobierno”.

El tema ahora cobró actualidad y está en el tapete de la discusión social, política y sindical. Por presión de las bases, la burocracia sindical comenzó a tambalear.

**Comité Ejecutivo de la
Central Obrera Departamental de La Paz
(Gestión 2003-2005)**

Strio. Ejecutivo	Salustiano Laura M.	Fabril
Strio. General	Rufo Calle Parra	FDUTCLP
Strio. General		Minero
Strio. Rel.	Pablo Chambi Janco	Constructor
Strio. Rel.	Modesto Argollo R.	Campesino
Strio. Hacienda	Fausto Laguna P.	Fabril
Strio. Confl.	Zenón Yupanqui A.	Gremial
Strio. Confl.	Valentín Ayllón Q.	Salud
Strio. Confl.	Fernando Téllez G.	Luz y Fuerza
Strio. Org.	Gregorio Paye R.	Fabril
Strio. Org.		Minero
Strio. Org.	Juan José Bautista L.	Luz y Fuerza
Strio. Actas	Toribio Aspi P.	Gremial
Strio. Prensa	Miguel A. Pinto P.	Sind. Prensa
Strio. Tierra	Isidro Quispe C.	FDMCLP
Strio. Ed. y C.		Mag. Urb.
Strio. Ed. y C.	Luis F. Guachalla	Mag. Rural
Strio. Reg. I.		Minero
Strio. Trans.	Saturnino Paucara	Trans. Inter.
Strio. Trans.	Julio Viera M.	AASANA
Strio. Coop. M.		Coop. Min.
Strio. Def. S.	Genaro Torrico Q.	Fabril

Strio. Def. S.	Simón Ortiz O.	Constructor
Strio. Def. S.	Arturo Moscoso T.	Caminos
Strio. H. S. I.	Sergio Alarcón C.	Luz y Fuerza
Strio. Seg. Soc.	Juan José Guzmán	Seguridad S.
Strio. DD.HH.	José Luis Campero	Entel
Strio. D. COB	Florentino Cauna	Fabril
Strio. M. A.	Alberto Chipana	FES
Strio. Vocal		Minero
Strio. Vocal	Manuela Huajlliri	FDMCLP-BS

ANEXO FOTOGRÁFICO



Afiche del encuentro nacional “Lecciones del Levantamiento Popular”



De izquierda a derecha: Arturo Moscoso, Gonzalo Triguero, Oscar Olivera, Miguel Pinto, Sacha Llorenti, Andrés Gómez y Genaro Torrico



Foto: Sergio Landaeta

Con la mediación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el mayor David Vargas dialogó con el Ministro de Defensa, Freddy Teodovich

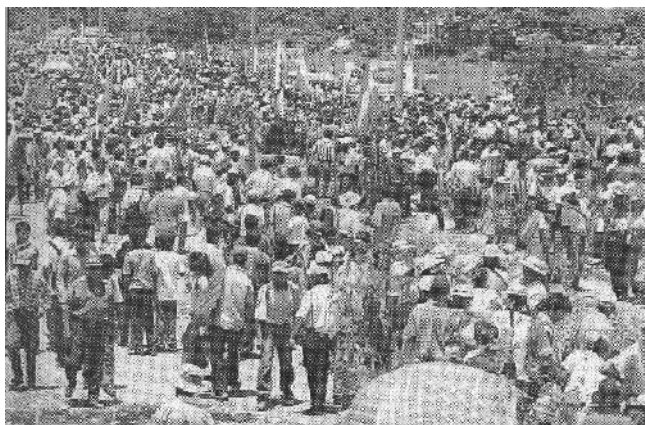


Foto: Jorge Landaeta

Un mes antes del levantamiento del 12 y 13 de febrero, los cocaleros bloquearon los caminos en el Chapare. La protesta fue reprimida a bala



Foto: Jorge Landacta

En enero de 2003, los jubilados del país le doblaron el brazo al Gobierno. Después de una caminata, fueron recibidos como héroes en La Paz



Foto: Sergio Landacta

En enero, el Gobierno de entonces desató una estrategia de control de los medios de difusión. Las movilizaciones de los periodistas detuvieron el plan



Foto: Jorge Landaeta

El 11 de febrero, la tropa policial se amotinó. El impuesto al salario tenía los días contados. El pueblo apoyó espontáneamente a los rebeldes



Foto: Sergio Landaeta

Un joven pinta un grafiti en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de los hechos del 12 y 13 de febrero de 2003



Foto: Jorge Landaeta

Los campesinos del país, después del alzamiento de febrero, plantearon una “pacto” entre los explotados del campo y de las ciudades



Foto: Jorge Landaeta

En las jornadas del 12 y 13 de febrero, el Ejército evitó el derrumbe del Gobierno. Los militares dispararon en contra del pueblo.



Foto: Jorge Landacta

Los dirigentes de sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda no estuvieron a la altura de los acontecimientos

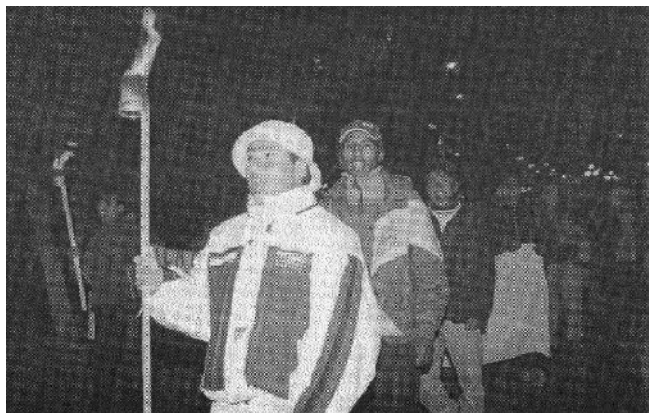


Foto: Jorge Landacta

El levantamiento popular hizo temblar a varias direcciones sindicales burocratizadas. Las bases se encontraban en proceso de radicalización

“Bolivia era el último país de Sudamérica, tal vez el penúltimo. Tuvimos que hacer profundos cambios. Primero tuvimos que liberarnos de la dominación imperial. En Bolivia ya no domina políticamente la embajada de Estados Unidos, tampoco domina económicamente el Fondo Monetario Internacional. Estas dos liberaciones, en lo político y en lo económico, ha sido importante para mi país”.

Evo Morales

28 de enero de 2016-01-28

Cuarta cumbre de la Celac - Ecuador



**Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social**